

MEXICO: TRANSPARENCY AND ACCESS TO INFORMATION



ifai

- **Español**
- **English**
- **Français**
- **Deutsch**
- **Italiano**
- **Portugués**

- © Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)
Av. Insurgentes Sur 1971 (Plaza Inn), 8o. y 9o. piso, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Primera Edición, IFAI
- © Impreso en México / *Printed in Mexico*

Traducciones al: Inglés: Lía Limón
Italiano: Jorgina Gaxiola
Francés: Federico Cortés
Alemán: Tania Rabasa
Portugués: Jimena Dada




TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La década de los ochenta se caracterizó por las transiciones políticas de regímenes autoritarios hacia sistemas eventualmente democráticos; los noventa se pueden identificar como el periodo de la “emergencia de la transparencia y el acceso a la información”. Aun cuando la primera legislación en materia de acceso a la información tuvo lugar en 1776, año en que Suecia aprobó la *Ley de Libertad de Prensa*, no ha sido sino hasta los últimos 10 años cuando estos dos temas —íntimamente ligados— han ingresado en la agenda política de un gran número de países. Actualmente más de 40 países cuentan con legislaciones que promueven el acceso a la información en posesión del gobierno y más de 30 países se encuentran en el proceso de elaboración, deliberación o aprobación de aquella reglamentación. La transparencia y el acceso a la información pública son dos cualidades fundamentales de un gobierno representativo. En efecto, un sistema democrático, además de garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el ascenso al poder debe también proveer canales institucionales de acceso a la información que permitan a la sociedad conocer y evaluar —periódicamente y no sólo por medio del sufragio sino también mediante otras formas de expresar preferencias— la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

La transparencia y el acceso a la información son dos mecanismos que promueven la rendición de cuentas —*accountability*— y ambos inciden directamente en el perfeccionamiento del sistema democrático pues contribuyen a que una multiplicidad de actores —entre los cuales destacan los organismos no gubernamentales, la sociedad civil, el ámbito académico e, incluso, los propios poderes del Estado— reduzcan los costos asociados a la supervisión y vigilancia del ejercicio del poder. Asimismo, la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental favorecen la creación de canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, los cuales permiten a la ciudadanía realizar un escrutinio crítico, bien informado y periódico sobre el ejercicio gubernamental.

En el caso de México, la primera aproximación al derecho de acceso a la información data de 1977 y está inscrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos constitucionales Sexto y Octavo reconocen, respectivamente, el derecho a la obtención de información gubernamental y el “derecho de petición” que faculta a cualquier ciudadano mexicano a realizar consultas relativas a las actividades gubernamentales. Es preciso reconocer, sin embargo, que ante la ausencia de una regulación jurídica aplicable en la materia, el acceso a la información había quedado como una concesión graciosa de la autoridad, sujeta a la buena voluntad de los funcionarios públicos y a la disponibilidad física de la información.





LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

La promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) —12 de junio de 2002— tiene la finalidad de subsanar las deficiencias y vacíos legales derivados de la ausencia de una reglamentación específica en materia de acceso a la información pública. Con la expedición de la LFTAIPG, México ha emprendido un proceso de cambio en la relación entre gobierno y gobernados y ha avanzado hacia una nueva forma de ejercicio de la función pública, “con las puertas abiertas y de cara a la sociedad”. El derecho de acceso a la información, garantizado por medio de esta legislación, le permitirá a México avanzar en la consolidación de un gobierno más democrático en el que todos y cada uno de los servidores y representantes públicos deberán rendir cuentas a los ciudadanos.

La LFTAIPG instituye el acceso de todo individuo a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y demás órganos federales. Entre los objetivos de la LFTAIPG destacan: “transparentar la gestión pública”; “favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos” de manera que puedan evaluar el desempeño de las entidades del gobierno y, “contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho” (LFTAIPG, artículo 4). La consecución de esas metas contribuirá a incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y también incidirá en que los actores políticos sean cada vez más responsables respecto a los procesos de deliberación y ejecución de las políticas públicas.

La LFTAIPG es una legislación valiosa, bien concebida, bien articulada, e inequívoca en definiciones y objetivos para garantizar el derecho de los individuos a obtener información en posesión del gobierno. Establece que toda información gubernamental tiene carácter público (artículo 2), e instruye a todas las dependencias y entidades del gobierno a favorecer el “principio de la publicidad” (artículo 6) por encima de la reserva.¹ Les concede a los individuos el derecho de solicitar información que aún no se ha hecho pública por medio de procedimientos sencillos y expeditos (artículo 40). Asimismo otorga a cualquier persona el derecho de recurrir en contra de la decisión de una entidad de denegar la información (artículo 49), y también concede el derecho de llevar a la entidad a juicio ante tribunales si el recurso de revisión interpuesto es rechazado.

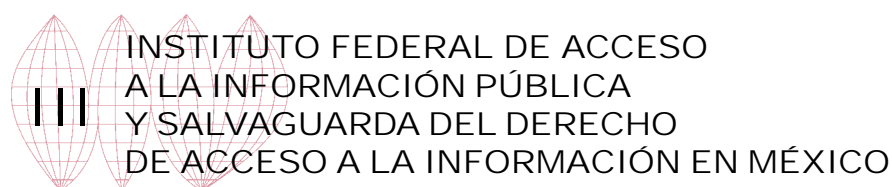
¹ De acuerdo con el Artículo 13 de la LFTAIPG, cierta información en posesión del gobierno puede considerarse como “reservada”; es decir, cierta información se puede encontrar temporalmente sujeta a excepciones de acceso y divulgación si y sólo si su difusión pudiera:

- I) Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
- II) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;
- III) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;
- IV) Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
- V) Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.



Más allá de establecer el carácter público de prácticamente toda la información que posee y genera el gobierno, la Ley dispone un listado de “obligaciones de transparencia” que cada dependencia y entidad debe observar. El Artículo 7 de la Ley obliga a las entidades a publicar, de manera rutinaria y asequible, toda aquella información relativa a las funciones diarias, presupuesto, operaciones, directorio del personal, salarios, informes internos, y celebración de contratos y concesiones. Además de la LFTAIPG, el Reglamento de la Ley impone el mandato preciso de actualizar la información relativa a las “obligaciones de transparencia” de todas y cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en periodos que van de tres meses a un año.

La mera existencia de una legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, sin embargo, no garantiza la práctica efectiva del derecho ciudadano de acceder a la información. En algunos países la legislación no provee mecanismos que refuercen el acceso a la información; otros gobiernos crean obstáculos o aprovechan vacíos legales para resistirse a difundir la información que está en su poder. Por estas razones y para avanzar exitosamente en la ejecución del derecho a acceder a la información, algunas legislaciones prevén la creación de instituciones autónomas encargadas de vigilar la observancia de la legislación de acceso a la información en posesión del gobierno.



La LFTAIPG contempla, en su Artículo 33, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual comenzó a operar oficialmente en junio de 2003. El IFAI está encargado de cumplir y hacer cumplir la LFTAIPG en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y es la instancia encargada de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información y de resolver la negativa de las autoridades de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. Asimismo, el IFAI tiene el mandato de salvaguardar la confidencialidad de los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Para garantizar el cumplimiento de su encomienda, el IFAI tiene la facultad de ejecutar funciones de resolución y regulación; de vigilancia y coordinación; de operación y administración y de promoción y difusión.

En México, a partir de la instauración del IFAI, todo aquel individuo interesado en solicitar información en posesión del gobierno federal puede solicitarla de tres formas:

1. Acudiendo al Centro de Atención a la Sociedad del IFAI en donde se dispone de equipo de cómputo y personal capacitado para orientarle y atenderle.
2. Presentándose directamente en la Secretaría de Estado o dependencia del gobierno de la cual se desea obtener información. El individuo debe acudir a una oficina especial de atención denominada “Unidad de Enlace”. Cada dependencia, por mandato de la LFTAIPG, debe contar con una de estas oficinas donde se le debe brindar toda la orientación necesaria para solicitar la información que requiere.



- Desde cualquier parte del país e, incluso, desde el extranjero, por medio del “Sistema de Solicitudes de Información” (SISI), al cual se puede ingresar por Internet en la dirección electrónica: <http://informacionpublica.gob.mx>

Cabe mencionar que este último mecanismo de acceso a la información en posesión del gobierno, el SISI, es una innovación a nivel internacional pues pocos países cuentan con un medio tan accesible para que los ciudadanos soliciten información pública gubernamental por medio del Internet. El IFAI ha asesorado a funcionarios de Canadá, Alemania, Gran Bretaña, la República Checa y Perú, entre otros países, interesados en adoptar sistemas de acceso a la información similares al SISI. La revolución electrónica ha afectado el acceso a la información y ha convertido al gobierno en un diseminador de información, reivindicando así los valores que ahora apoyan las provisiones del gobierno abierto. El IFAI está inmerso en esa corriente y facilita el acceso de la ciudadanía a la información en posesión del gobierno a través de medios de comunicación remota, como ocurre con el SISI.

En seis meses de operación —junio a diciembre de 2003—, se han presentado más de 24,000 solicitudes de información de las cuales, el 93% se han efectuado por medio del SISI:

Solicitudes	TOTAL JUNIO (12 AL 30)	TOTAL JULIO	TOTAL AGOSTO	TOTAL SEPTIEMBRE	TOTAL OCTUBRE	TOTAL NOVIEMBRE	TOTAL DICIEMBRE (01 AL 11)	TOTAL
Solicitudes electrónicas	4,674	3,887	4,388	2,961	2,881	2,733	751	22,275
Solicitudes manuales	426	343	255	265	233	198	82	1,802
Total de solicitudes	5,100	4,230	4,643	3,226	3,114	2,931	833	24,077
Respuestas electrónicas	1,519	4,287	3,995	3,265	2,899	2,303	1,069	19,337
Respuestas manuales	95	357	263	269	214	158	94	1,450
Total de respuestas	1,614	4,644	4,258	3,534	3,113	2,461	1,163	20,787
Recursos de Revisión	17	83	69	145	146	103	44	607

El SISI es un sistema universal que administra las solicitudes de información y de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la LFTAIPG, su Reglamento y los lineamientos emitidos por el IFAI. Los solicitantes, los sujetos obligados y el IFAI pueden hacer uso del SISI, el cual permite suministrar información estadística al propio Instituto y sirve como sustento del Informe Anual que las autoridades del IFAI deben presentar al Poder Legislativo.

El SISI se ha erigido como el medio de comunicación más eficiente entre la sociedad, las dependencias y entidades y el IFAI al registrar todas las solicitudes de acceso a la información en documentos que estén en posesión de las entidades de la administración pública federal, independientemente de la forma como la presenta el solicitante, es decir, por Internet, por correo o físicamente ante la Unidad de Enlace correspondiente.



El SISI funciona a lo largo de seis etapas que constituyen el proceso de acceso a la información desde que la persona ingresa la solicitud, pasando por el proceso interno de tratamiento de la solicitud, hasta la entrega de la información y el eventual recurso de revisión interpuesto ante el IFAI:

Fase 1: Solicitud – La persona debe ingresar su solicitud en el SISI o, redactarla en papel, que puede enviarse por correo o entregar personalmente en la Unidad de Enlace para que ésta la capture y procese en el sistema. En todos los casos el SISI asignará un número de folio para dar seguimiento a la solicitud.

Fase 2: Recepción e investigación – La dependencia o entidad recibe la solicitud y la turna a la unidad administrativa correspondiente, con el fin de que investigue si existe la información y si tiene carácter de pública, reservada o confidencial. De contar con la información y ser pública, la unidad administrativa remite la misma a la Unidad de Enlace y precisa, si da lugar, el costo de acuerdo con las modalidades de entrega.

Fase 3: Respuesta, opciones de entrega y envío – La dependencia o entidad notifica al solicitante sobre la respuesta a su solicitud. En caso de ser negativa le informará sobre la opción de presentar un recurso de revisión ante el IFAI. En caso de que la respuesta sea afirmativa, el SISI informará al solicitante sobre los medios en los cuales puede ser reproducida la información, los costos de reproducción, así como las diferentes formas de envío y sus costos. El sistema emitirá una ficha con una clave de identificación bancaria, mediante la cual se podrá realizar el pago.


Fase 4: Notificación de pago – Una vez realizado el pago, el banco avisará automáticamente al SISI sobre éste, con lo cual la dependencia o entidad sabrá en todo momento qué solicitantes cubrieron las cuotas de reproducción y de envío correspondientes, a efecto de que procedan a la reproducción y envío de la información.

Fase 5: Entrega o envío – Cuando la dependencia o entidad haya reproducido y enviado la información solicitada, el SISI informará al solicitante la fecha en que se realizó el envío, y en su caso, el número de guía. En todo caso, la información será gratuita siempre y cuando sea entregada por medios electrónicos.

Fase 6: Recurso – Si el solicitante decide presentar un recurso de revisión por la negativa de información, el SISI le permitirá hacerlo por vía electrónica. El solicitante también podrá enviar un escrito o acudir personalmente al IFAI. En estos dos últimos casos, el IFAI incorporará los datos del recurrente en el SISI. El IFAI estudiará el caso y notificará al recurrente dentro del plazo establecido.

El procedimiento de consulta o modificación de datos personales a través del SISI requerirá autenticar la identidad del solicitante.





IV
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

De acuerdo con el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques”. La democracia se desarrolla y justifica en el respeto de la privacidad de las personas que forman parte de ella. Sólo desde el ámbito de reconocimiento de la intimidad y autonomía de cada ciudadano puede construirse una sociedad auténticamente libre.

La protección de datos de carácter personal encuentra su razón de ser, no en el resguardo del ámbito íntimo de la vida privada, sino en la posibilidad de controlar esta información para asegurar al individuo frente al riesgo que supone el acopio y la transmisión de sus datos. La fracción II del Artículo 3 de la LFTAIPG define a los datos personales como: “[...]la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad”.

Para acceder a la información referente a datos personales, contenida en archivos públicos, el Artículo 24 de la LFTAIPG dispone que sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar ante una Unidad de Enlace el acceso a sus datos personales que obren en las bases de datos gubernamentales. La información correspondiente deberá ser entregada al interesado dentro del término de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible, o bien, se le comunicará por escrito que en ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante. Si existe negativa de entregar o corregir datos personales, procederá la interposición del recurso de revisión ante el IFAI. De igual manera procederá en el caso de falta de respuesta en los plazos previstos por la Ley.

De acuerdo con el Artículo 37 de la LFTAIPG, el IFAI tiene entre sus atribuciones establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial (fracción III) y establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, que estén en posesión de las dependencias y entidades (fracción IX). En este sentido, el IFAI es la institución encargada de salvaguardar la protección de los datos personales y de evitar la difusión, distribución o comercialización de los datos personales contenidos en los sistemas de información de los sujetos obligados.

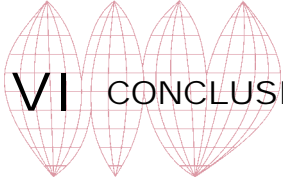




ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS

El IFAI busca promover y establecer relaciones de colaboración y apoyo con los estados y los municipios, con el propósito de intercambiar experiencias e impulsar el desarrollo normativo e institucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Trece estados de la federación cuentan con leyes de acceso a la información: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa. Varios estados más (Chiapas, Hidalgo, Puebla y Veracruz, entre otros) se encuentran en proceso de adoptar leyes en la materia. Entre los estados destaca Colima porque además de la legislación de acceso a la información puso en vigor una Ley de protección de datos personales —la primera legislación de esta índole en el ámbito nacional—. En lo que respecta al ámbito local, los municipios de Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Torreón cuentan con un reglamento de transparencia y acceso a la información.





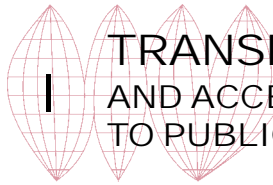
VI CONCLUSIÓN

El IFAI está creando mecanismos conducentes a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en México: las obligaciones de transparencia impuestas por la LFTAIPG y verificadas por el IFAI contribuyen a clarificar los alcances de este tema y sitúan a México en los mejores estándares en la materia a nivel internacional. El apartado sobre la clasificación establece la creación de un registro de todos los documentos que produce el gobierno, lo cual permitirá en el futuro simplificar el acceso a la información pública. Por otro lado, aclara que el periodo de reserva de la información cuenta a partir de que la información se genera y no a partir de la clasificación del documento. Finalmente, el tratamiento de las cuotas de acceso busca evitar que el pago de reproducción y envío de información sea un obstáculo para la transparencia.

La LFTAIPG y el IFAI ejercen efectos positivos para México en los ámbitos económico y político. Sin duda, un Estado más transparente será por consecuencia más eficiente. Esta mejoría en la eficiencia estatal no sólo se reflejará en el largo plazo en un fortalecimiento del erario público, que es patrimonio de todos los mexicanos, sino también de la economía en su conjunto. Lo anterior se explica al considerar que los costos que representa la corrupción para nuestra economía ascienden a varios puntos porcentuales del PIB. Al reducirse la corrupción, estos recursos se podrían canalizar a actividades productivas y sociales.

En el ámbito político y dentro de un proceso de democratización, al garantizar el derecho de acceso a la información el IFAI auspicia el proceso de consolidación democrática en el que todos y cada uno de los servidores públicos deberán rendir cuentas a los ciudadanos. El acceso a la información es una de las tareas más importantes de la agenda democrática nacional, en el entendido de que la democracia, como forma de participación en el gobierno, depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en el ámbito público. Así pues, el IFAI participa en la construcción y refuerzo de la rendición de cuentas, incide en la eficiencia administrativa y crea condiciones aptas para que los ciudadanos supervisen el ámbito gubernamental.



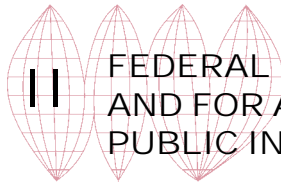


I TRANSPARENCY AND ACCESS TO PUBLIC INFORMATION

The eighties was a decade characterized by the political transition from authoritarian regimes to systems that over time were to become democratic; the nineties stand out as the period of “the advent of transparency and access to information”. Despite the fact that the very first legislation in terms of access to information came into being in 1776 –when Sweden passed the Freedom of Press Law– it has only been in the past ten years that these two topics, intrinsically linked, have been incorporated into the political agenda of a sizeable number of countries. At present, over 40 countries have established legislation that promotes access to information in the hands of government, and another 30 are undergoing the process of designing, discussing or adopting said regulations. Transparency and access to public information are two qualities inherent to a representative government. In fact, a democratic system should promote institutional channels for access to information that will enable society to be informed of and evaluate (on a periodic basis, not merely through electoral processes but through alternative ways of expressing preference) government management and the performance of civil servants. This is, obviously, in addition to guaranteeing clear and reliable rules to govern electoral competition and the rise to power.

Transparency and access to information are two mechanisms that foster accountability; both have a direct effect on the perfecting of the democratic system in that they allow for a multitude of stakeholders –including non-governmental organizations, civil society, academia, and State powers themselves– to bring down costs linked to the monitoring and supervision of those in power. Transparency and access to public governmental information both favor the creation of communication channels between State institutions and society. This enables society to scrutinize government administration in a critical, well-informed and periodic manner.





FEDERAL LAW FOR TRANSPARENCY AND FOR ACCESS TO GOVERNMENTAL PUBLIC INFORMATION

The promulgation of the Federal Law for Transparency and for Access to Governmental Public Information (LFTAIPG is the acronym for the name in Spanish) —on June 12, 2002— has at its core the objective of mending the shortcomings and legal voids stemming from the absence of specific regulations on access to public information. With the issuance of this Federal Law, LFTAIPG, Mexico has embarked on a process of change in the relationship between the government and those governed, and has forged ahead toward a new way to manage public service, “with open doors and facing society”. The right to access information, guaranteed by this legislation, will enable Mexico to move towards the consolidation of a more democratic government, one in which each and every one of its civil servants and public representatives will be held accountable to the citizens.

The LFTAIPG established access for all individuals to information in the hands of the State branches, autonomous constitutional bodies, federal administrative tribunals, and other federal bodies. Some of the primary objectives of the LFTAIPG are to: “render public administration transparent”; “foster accountability to citizens” –so they may evaluate the performance of government entities–, and, “contribute to the democratization of Mexican society and the full application of the Rule of Law” (LFTAIPG, Article 4). The attainment of these goals will contribute to increasing citizen trust in governmental institutions and will also lead to increasingly responsible political role-players involved in the process of designing and implementing public policy.

The LFTAIPG is a valuable piece of legislation, well conceived, well articulated, and unequivocal in its definitions and objectives, designed to ensure the rights of individuals to obtain information that is in the hands of government. It establishes that all government information is inherently of a public nature (Article 2), and instructs all government offices and entities to favor the “principle of publicity” (Article 6) over that of secrecy.¹ It grants citizens the right to seek the disclosure of information not already public through a straightforward request process (Article 40). In addition, the LFTAIPG grants any individual the right to appeal an entity’s decision to deny information (Article 49), and the right to take the case to court should said appeal be denied.

Going beyond establishing the public nature of practically all information either generated by or in the hands of the government, the Law provides a list of “transparency obligations” that each government office and entity must observe. Article 7 of the Law mandates the entities to publish –in a routine and accessible manner– all information relevant to everyday functions, budget, operations, personnel

¹ According to article 13 of the FOIA, the information that the government possesses can be considered “reserved”, (temporarily subject to exemptions of access) only if its dissemination can:

- I) Affect national or public security or national defense;
- II) Affect the conduct of the negotiations or international affairs, including the confidential information that other states or international organizations give to Mexico with that character;
- III) Damage the financial, economic or monetary stability of the country;
- IV) Put under risk life, security or health of any person, or
- V) Cause a serious damage to activities related to the verification of the fulfillment of the laws, prevention or persecution of crimes, the collecting of the contributions, the operations of migratory control, the procedural strategies in judicial or administrative processes while there is not a final resolution.



directory, wages, internal reports, and the signing of contracts and concessions. In addition to the LFTAIPG, the Regulations of the Law impose the specific mandate to update information relevant to the “obligations of transparency” for each and every one of the government offices and entities under the Federal Public Administration over a timeframe ranging from three months to one year.

The existence alone of legislation on access to public governmental information does not in and of itself guarantee the effective practice of a citizen’s right to access to information. In some countries, legislation does not provide mechanisms that strengthen access to information; other governments create obstacles or take advantage of legal voids to refuse the dissemination of the information they hold. Given these reasons, and in order to forge ahead successfully in the implementation of the right to access to information, some legislations foresee the creation of autonomous institutions responsible for monitoring the application of legislation on access to information in the hands of the government.



In Article 33, the LFTAIPG provides for the creation of the Federal Institute for Access to Public Information (IFAI is the acronym for the name in Spanish), which officially began operating in June of 2003. The IFAI is responsible for enforcing and ensuring application of the LFTAIPG in the Federal Executive Branch, and is the body responsible for promoting and disseminating the right to access to information and for settling refusals from the authorities to respond to petitions for access to information. At the same time, the IFAI is mandated to safeguard the confidentiality of personal information in the hands of government offices and entities. To ensure compliance of this mandate, the IFAI is empowered to carry out functions entailing settlement and regulation, monitoring and coordination, and the operation and management of promotion and dissemination activities.

Since the creation of the IFAI, any Mexican citizen interested in requesting information that is in the hands of the federal government has three options to do so, by:

1. Visiting the IFAI Service Center, where qualified personnel and computer equipment is available to assist and guide petitioners.
2. Going directly to the Secretary of State of Government Office where one wishes to obtain information from. The individual must then go to the special office called “Liaison Office”. Every government office, per LFTAIPG mandate, must operate one of these offices to provide guidance for requesting information.
3. Accessing <http://informacionpublica.gob.mx> through the Internet from any point in the country or abroad, and clicking on “System for Information Petitions”. (SISI)



We would underscore that the last mechanism mentioned for accessing government information, known as the SISI in Spanish, is an innovation at the international level, given that very few countries offer such a user-friendly means for citizens to request public governmental information via the Internet. The IFAI has provided consultancy service to government officials from Canada, Germany, Great Britain, the Czech Republic and Peru, just to mention some countries, interested in setting up systems to access information similar to the SISI. The electronic revolution has had an effect on access to information, turning the government into a disseminator of information, thus recovering the values that now support the provisions of an open government. The IFAI is wholly immersed in this current, facilitating for citizens access to information in the hands of government through remote communication means, as is the case with the SISI.

In only six months of operation —June through December 2003— over 24,000 petitions for information have been submitted; of these, 93% have been submitted through the SISI:

Requests	JUNE (12 TO 30)	JULY	AUGUST	SEPTIEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER (01 TO 11)	TOTAL
Electronic requests	4,674	3,887	4,388	2,961	2,881	2,733	751	22,275
Written requests	426	343	255	265	233	198	82	1,802
Total number of requests	5,100	4,230	4,643	3,226	3,114	2,931	833	24,077
Electronic answers	1,519	4,287	3,995	3,265	2,899	2,303	1,069	19,337
Written answers	95	357	263	269	214	158	94	1,450
Total number of answers	1,614	4,644	4,258	3,534	3,113	2,461	1,163	20,787
Appeals	17	83	69	145	146	103	44	607

The SISI is a universal system that manages petitions for information and personal data in accordance to the provisions of the LFTAIPG, its Regulation and the guidelines issued by IFAI. Petitioners, government parties responsible and the IFAI can all use the SISI, which provides statistical information to the Institute itself, and can be used as support for the Annual Report that the IFAI authorities must submit to the Legislative Branch.

The SISI has emerged as the most efficient means of communication, linking society, government offices and entities and the IFAI through registering all petitions for access to information in documents that remain in the hands of entities of federal public administration, regardless of the mechanism employed by the petitioner; that is to say, either through the Internet, through postal service, or physically visiting the appropriate Liaison Office.

The SISI operates based on six stages that comprise the process for access to information from the time that the individual submits his or her petition, then the internal process for handling said petition, through the delivery of information and possible appeal before the IFAI:

Phase 1: Petition – The individual must submit his or her petition to the SISI or draft it in print and send via postal service, or hand deliver at the Liaison Office for it to be typed

and processed within the system. In all cases, the SISI will assign a folio number for followup purposes.

Phase 2: Reception and investigation – The government office or entity receives said petition and turns it over to the corresponding administrative unit. Said unit investigates if the requested information is available and determines its nature, which can be public, reserved or confidential. The government office or entity in question receives the petition, and turns it over to the corresponding administrative unit for investigation concerning the existence of the information requested and its nature, which can be public, reserved or confidential. When the information requested exists and is public, this administrative unit sends said information to the Liaison Office and indicates, where applicable, the cost entailed according to delivery mode.

Phase 3: Response, delivery options and delivery – The government office or entity notifies the petitioner of the response to the petition. If it is negative, the petitioner will be advised of the option of an appeal before the IFAI. In the case of an affirmative response, the SISI will notify the petitioner of the means available for copying the information and the cost of copying the information, as well as of different means of delivery and their respective costs. The system issues a slip with a bank identification code through which payment can be made.

Phase 4: Notification of payment – Once payment has been made, the bank automatically notifies the SISI of said payment; the government office or entity can know at all times which petitioners have covered the cost of copying and delivering the information in question, so that said information can then be copied and issued.

Phase 5: Delivery or sending – When the government office or entity has copied and sent the information requested, the SISI will inform the petitioner of the date on which the information was sent and, when applicable, the tracking number. In any case, information delivered via electronic means will at all times be free of charge.

Phase 6: Appeal – If the petitioner decides to submit an appeal when information is denied, the SISI facilitates this process through electronic means. The petitioner can also submit in print and send in or personally call at the IFAI. In the latter two cases, the IFAI will incorporate the information on the individual requesting an appeal through the SISI. IFAI will study the case and notify said individual within the period established.

The process for consultation or changes to personal information through the SISI requires authentication of the petitioner's identity.



In keeping with Article 12 of the Universal Declaration on Human Rights “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, or to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” Democracy is developed and justified within the framework of the respect of the privacy of the individuals that are a part of it. A genuinely free society can only take shape based on the recognition of the privacy and autonomy that is due to all citizens.

The protection of personal information is founded on controlling said information to guarantee the protection of the individual who is risking transmitting said personal information, and not on the protection per se of the intimacy of private life. Subparagraph II of Article 3 of the LFTAIPG defines personal information as: “[...] the information relevant to an individual, identified or identifiable from another, information pertaining to ethnic or racial origin, or information pertaining to physical, moral or emotional traits, his or her family and sentimental life, address, telephone number, patrimony, ideology and political opinions, religious or philosophical beliefs or conviction, state of physical or mental health, sexual preference and other similar issues related to his or her privacy”.

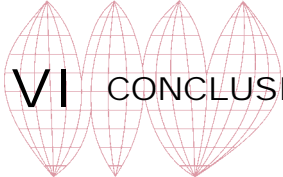
Access to information pertaining to personal information contained in public archives is dealt with by the LFTAIPG in Article 24, a provision stipulating that only the interested party and his or her representatives can request a Liaison Office for access to personal information contained in governmental databases. Said information will be submitted to the interested party within ten working days to be counted from the date the request was received by the LFTAIPG, in clearly understandable format, or the interested party will be notified in writing that the personal information system does not contain information pertaining to petitioner. If delivery or correction of personal information is refused, an appeal can be submitted to the IFAI. The same applies in the case of lack of compliance to the timeframes established by Law.

In keeping with Article 37 of the LFTAIPG, the IFAI is empowered, among other things, to establish and review the criteria for classification and de-classification, and is responsible for the custody of reserved and confidential information (Subparagraph III) and to establish the guidelines and general policies for the management, security and protection of personal information that is in the hands of government offices and entities (Paragraph IX). In this regard, the IFAI is the institution responsible for safeguarding the protection of personal information and for avoiding the dissemination, distribution and/or marketing of the personal information contained in the information systems of the government parties responsible.

V ACCESS TO STATE AND MUNICIPAL INFORMATION

The IFAI seeks to promote and establish collaboration and support at the state and municipal levels with the objective of exchanging experiences and fostering the development of standards and institutions in matters of transparency, access to information and the protection of personal information. Thirteen states of the federation already have laws to ensure access to information, namely: Aguascalientes, Coahuila, Colima, the Federal District, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Morelos, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi and Sinaloa. Several other states (Chiapas, Hidalgo, Puebla and Veracruz, among others) are undergoing the process to adopt legislation on the matter. The state of Colima stands out, given that in addition to legislating access to information, it seeks to enforce a Law for the protection of personal information —the first such legislation in the country. As regards the local sphere, the municipalities of Guadalajara, Monterrey, Queretaro and Toraeron already have regulations on transparency and access to information in place.





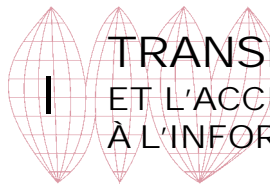
VI CONCLUSION

The IFAI is creating mechanisms geared to fostering transparency and accountability in Mexico: the obligations concerning transparency imposed by the LFTAIPG and verified by the IFAI contribute to clarifying the scope of this matter, placing Mexico among the countries with the highest standards at the international level. The heading on classification provides for the creation of a registry of all documents produced by the government, which will in future simplify access to public information. On the other hand, it states that the period for reserving information is counted from the time said information is generated and not from the time of the classification of the document. Lastly, the establishment of access fees is an attempt to prevent the cost of copying and sending information from becoming a deterrent to transparency.

The LFTAIPG and the IFAI exert positive effects for Mexico in the economic and political arenas. Doubtless, a more transparent State will consequently be a more efficient one. This improved State efficiency will not only be reflected in the long term through strengthening the public treasury –the heritage of all Mexicans– but also the economy as a whole. This can be explained when we witness the cost of corruption in our economy rising to several percentile points of GDP. Upon reducing corruption, these recourses can be channeled to productive and social activities.

In the political sphere, and within the framework of the democratization process, the IFAI guarantees the right to access information and thus fosters a process of democratic consolidation through which each and every one of the country's civil servants is to be held accountable to the citizens. Accessing information is one of the most important tasks on the national democratic agenda, in the understanding that democracy seen as government participation depends on the capacity of the citizens to take part in public life. Hence, the IFAI is taking part in the construction and strengthening of accountability, has a positive effect on administrative efficiency and fosters appropriate conditions for citizens to supervise governmental spheres.






I TRANSPARENCE ET L'ACCÈS À L'INFORMATION PUBLIQUE

Si la décennie des années quatre-vingt s'est caractérisée par des transitions politiques de régimes autoritaires vers des systèmes éventuellement démocratiques, les années quatre-vingt-dix peuvent être identifiées comme la période « de l'émergence de la transparence et de l'accès à l'information. » Même si la première législation en matière d'accès à l'information a eu lieu en 1776 – année où la Suède a approuvé la « *Loi de Liberté de Presse* » - ce n'est qu'au courant des dix dernières années que ces deux sujets, intimement liés, ont été introduits dans l'agenda politique d'un grand nombre de pays. Actuellement, plus de quarante pays disposent de législations qui promeuvent l'accès à l'information en possession du gouvernement et plus de trente pays se trouvent dans le processus d'élaboration, de délibération ou d'approbation de cette réglementation. La transparence et l'accès à l'information publique sont deux éléments fondamentaux et constitutifs d'un gouvernement représentatif. En effet, un système démocratique, en plus de garantir des règles claires et fiables en matière de concurrence électorale doit aussi fournir des canaux institutionnels d'accès à l'information qui permettent à la société de connaître et d'évaluer - périodiquement et non seulement au moyen du suffrage, mais aussi au moyen d'autres façons d'exprimer des préférences - la gestion gouvernementale et la performance des fonctionnaires.

La transparence et l'accès à l'information sont deux mécanismes qui promeuvent la reddition de comptes – « *accountability* » - et tous les deux influencent directement l'amélioration du système démocratique, car ils contribuent à qu'une multiplicité d'acteurs – parmi lesquels nous retrouvons les organismes non gouvernementaux, la société civile, le cadre académique, voire les pouvoirs de l'État - réduisent les coûts associés à la supervision et à la surveillance de l'exercice du pouvoir. De même, la transparence et l'accès à l'information publique gouvernementale favorisent la création de moyens de communication entre les institutions de l'État et la société, lesquels permettent à la citoyenneté d'effectuer un examen minutieux, bien informé et quotidien de l'exercice gouvernemental.

Dans le cas du Mexique, les premiers fondements du droit d'accès à l'information datent de 1977 et ce sont inscrits dans la « Constitution Politique des Etats-Unis Mexicains ». Les sixième et huitième articles constitutionnels reconnaissent, respectivement, le droit à l'obtention d'information gouvernementale et le « droit de demande » qui autorise à tout citoyen mexicain d'effectuer des consultations relatives aux activités gouvernementales. Il est nécessaire de reconnaître, toutefois, que devant l'absence d'un règlement juridique applicable dans la matière, l'accès à l'information était demeuré comme une prérogative de l'autorité, soumise à la bonne volonté des fonctionnaires et à la disponibilité physique de l'information.



LOI FÉDÉRALE DE TRANSPARENCE ET D'ACCÈS À L'INFORMATION PUBLIQUE GOUVERNEMENTALE

La « Loi Fédérale de Transparence et d'Accès à l'Information Publique Gouvernementale » (LFTAIPG), promulguée le 12 juin 2002, vise à corriger les insuffisances et les vides légaux dérivés de l'absence d'une réglementation spécifique en matière d'accès à l'information publique. Avec l'expédition de la LFTAIPG, le Mexique a entrepris un processus d'évolution dans la relation entre gouvernement et régis. Le droit d'accès à l'information, garanti au moyen de cette législation, permettra au Mexique d'avancer dans la consolidation d'un gouvernement plus démocratique dans lequel chacun des employés et représentants publics devront rendre des comptes aux citoyens.

La LFTAIPG a institué l'accès de tout individu à l'information en possession des « Pouvoirs de l'Union », les organes constitutionnels autonomes, les tribunaux administratifs fédéraux et autres organes fédéraux. Entre les objectifs de la LFTAIPG, on retrouve : « Rendre transparente la gestion publique », « favoriser la reddition de comptes aux citoyens » de sorte qu'ils puissent évaluer l'exercice des organismes du gouvernement et « contribuer à la démocratisation de la société mexicaine et à la pleine vigueur de l'État de droit » (LFTAIPG, Article 4). L'achèvement de ces objectifs contribuera à augmenter la confiance des citoyens envers les institutions gouvernementales et aussi influencera à ce que les acteurs politiques soient chaque fois plus responsables en ce qui concerne les processus de délibération et d'exécution des politiques publiques.

La LFTAIPG est une législation valable, bien conçue, bien articulée et claire dans ses définitions et ses objectifs pour garantir le droit des individus d'obtenir de l'information en possession du gouvernement. Elle établit que toute information gouvernementale est de caractère public (Article 2) et a poussé toutes les dépendances et organismes du gouvernement vers une culture du « principe de la publicité » (Article 6) au-dessus de la « réserve »¹. Elle accorde aux individus le droit de solliciter une information qui n'a pas été rendue encore publique par moyen de procédures simples et expéditives (Article 40). De même, la LFTAIPG concède à toute personne le droit de recourir contre la décision d'un organisme de refuser l'information (Article 49) et prévoit la possibilité d'emmener ce dernier devant des tribunaux si la « ressource de révision » interposée est rejetée.

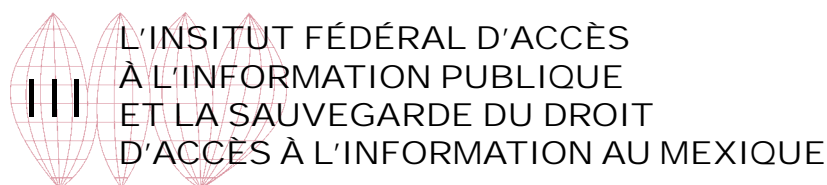
En plus d'établir le caractère public de pratiquement toute l'information que possède et produit le gouvernement, la Loi dispose un listing « d'obligations de transparence » que chaque dépendance

¹ D'après l'Article 13 de la LFTAIPG, une certaine information en possession du gouvernement peut être considérée comme « réservée », c'est-à-dire, une certaine information peut être temporairement soumise à des exceptions d'accès et de divulgation si sa diffusion pourrait :

- I) Compromettre la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense nationale.
- II) Amoindrir la conduite des négociations ou bien, des relations internationales, y compris cette information que d'autres États ou organismes internationaux livrent à titre confidentiel à l'État mexicain.
- III) Endommager la stabilité financière, économique ou monétaire du pays.
- IV) Mettre en risque la vie, la sécurité ou la santé de toute personne.
- V) Causer un préjudice sérieux aux activités de vérification de l'accomplissement des lois, la prévention ou la persécution des infractions, la répartition de la justice, la collecte des contributions, les opérations de contrôle de migration, les stratégies de procédure dans des processus judiciaires ou administratifs tant que les résolutions ne constituent pas un verdict final.

et organisme doit observer. L'Article 7 de la Loi oblige les organismes à publier, de manière simple, toute cette information relative aux fonctions quotidiennes, budgets, opérations, annuaires du personnel, salaires, rapports internes et conclusion des contrats et des concessions. Outre la LFTAIPG, le « Règlement de la Loi » impose le mandat spécifique de mettre à jour l'information relative aux « obligations de transparence » de toutes et chacune des dépendances et des organismes de « l'Administration Publique Fédérale » dans des périodes qui vont de trois mois à une année.

La simple existence d'une législation en matière d'accès à l'information publique gouvernementale, toutefois, ne garantit pas la pratique efficace du droit des citoyens d'accéder à l'information. Dans quelques pays, la législation ne fournit pas de mécanismes qui renforcent l'accès à l'information ; d'autres gouvernements créent des obstacles ou profitent des vides légaux afin de ne pas diffuser l'information qui est en leur pouvoir. Pour ces raisons et pour réussir dans l'exécution du droit d'accéder à l'information, quelques législations prévoient la création d'institutions autonomes chargées de surveiller l'observance de la législation d'accès à l'information en possession du gouvernement.



La LFTAIPG prévoit, dans son Article 33, la création de « l'Institut Fédéral d'Accès à l'Information Publique » (IFAI), qui a commencé à opérer officiellement en juin 2003. L'IFAI est chargé d'accomplir et de faire accomplir la LFTAIPG dans le cadre du « Pouvoir Exécutif Fédéral » et c'est l'instance chargée de promouvoir et de diffuser l'exercice du droit d'accès à l'information et de résoudre le refus des autorités de répondre aux demandes d'accès à l'information. De même, l'IFAI a le mandat de sauvegarder le caractère confidentiel des données personnelles (ou renseignements de la vie privée) en possession des dépendances et des organismes gouvernementaux. Pour garantir l'accomplissement de sa charge, l'IFAI a la faculté d'exécuter des fonctions de : 1) Résolution et de réglementation, 2) De surveillance et de coordination, 3) D'opération et d'administration et 4) de promotion et de diffusion d'une culture de l'accès à l'information et de la reddition de comptes.

Au Mexique, depuis la mise en fonction de l'IFAI, tout individu intéressé à solliciter une information en possession du gouvernement fédéral peut en faire la demande de trois manières:

1. En allant au « Centre d'Attention à la Société » de l'IFAI où on dispose d'ordinateurs et du personnel formé pour l'orienter et s'occuper d'elle/lui.
2. En se présentant directement dans le « Secrétariat d'État » ou la dépendance du gouvernement dont on souhaite obtenir une information. L'individu doit aller à un bureau spécial d'attention appelé « Unité de Liaison ». Chaque dépendance, par mandat de la LFTAIPG, doit disposer de ces bureaux où on doit lui offrir toute l'orientation nécessaire pour solliciter l'information qui est requise.

3. À partir du « Système de Demandes d'Information », le « SISI », disponible par Internet à l'adresse électronique suivante : <http://informacionpublica.gob.mx>, ou à partir du site Internet de l'IFAI : www.ifai.org.mx.

Il convient de mentionner que ce dernier mécanisme d'accès à l'information en possession du gouvernement, le « SISI », est une innovation au niveau international ; peu de pays disposent d'un moyen si simple permettant aux individus de solliciter une information publique au moyen d'Internet. L'IFAI a conseillé des fonctionnaires du Canada, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de la République Tchèque et du Pérou, entre autres, intéressés à adopter des systèmes d'accès à l'information semblables au « SISI ». La révolution électronique a affecté l'accès à l'information et a transformé le gouvernement en un diffuseur d'information, en revendiquant ainsi les valeurs qui soutiennent le « gouvernement ouvert ». L'IFAI est inscrit dans ce courant et fournit l'accès des citoyens à l'information en possession du gouvernement à travers des moyens de communication éloignée, comme c'est le cas avec le « SISI ».

Dans six mois d'opération – de juin à décembre 2003 -, plus de 24.000 demandes d'information ont été présentées dont 93% ont été effectuées au moyen du « SISI » :

Demands d'information	JUIN (12 AU 30)	JUILLIET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE (01 AU 11)	TOTAL
Demands par le SISI	4,674	3,887	4,388	2,961	2,881	2,733	751	22,275
Demands manuelles	426	343	255	265	233	198	82	1,802
Total de demands	5,100	4,230	4,643	3,226	3,114	2,931	833	24,077
Réponses par le SISI	1,519	4,287	3,995	3,265	2,899	2,303	1,069	19,337
Réponses manuelles	95	357	263	269	214	158	94	1,450
Total de réponses	1,614	4,644	4,258	3,534	3,113	2,461	1,163	20,787
« Ressources de Révision »	17	83	69	145	146	103	44	607

Le « SISI » est un système universel qui administre les demandes d'information et les données personnelles, en accord avec ce qui est établi par la LFTAIPG, le « Règlement de la Loi » et les linéaments émis par l'IFAI. Les demandeurs d'information, les organismes et dépendances du gouvernement et l'IFAI peuvent faire usage du SISI, lequel permet de fournir des statistiques à l'Institut lui-même et sert comme soutien du « Rapport Annuel » que les *Commissaires d'Information* de l'IFAI doivent présenter au « Pouvoir Législatif ».

Le « SISI » s'est érigé comme étant le moyen de communication le plus efficace entre la société, les dépendances et l'IFAI en enregistrant toutes les demandes d'accès à l'information en possession des organismes de « l'Administration Publique Fédérale », indépendamment de la manière comment a été demandé l'information, c'est-à-dire, par Internet, par courrier ou en personne devant « l'Unité de Liaison » correspondante.

Le « SISI » comporte six étapes qui constituent le processus d'accès à l'information. Il commence quand l'individu a introduit la demande, en passant par le processus interne de traitement et de recherche, jusqu'à la livraison d'information et à l'éventuelle « ressource de révision » interposée devant l'IFAI :

Phase 1 (Demande) : La personne doit entrer dans le « SISI » sa demande d'information ou remplir un formulaire papier qu'elle peut envoyer par courrier ou livrer personnellement dans « l'Unité de Liaison » pour que celle-ci l'entre dans le système. Dans tous les cas, le « SISI » assignera un numéro de feuillet pour suivre le cours de la demande.

Phase 2 (Réception et recherche) : La dépendance ou l'organisme reçoit la demande et il la relaye à l'unité administrative correspondante, afin qu'elle fasse des recherches sur l'existence de l'information et si son caractère est publique, « réservée » ou confidentielle. Si l'information est publique, l'unité administrative doit remettre cette dernière à « l'Unité de Liaison » et doit spécifier, si ont lieu, les coûts de livraison.

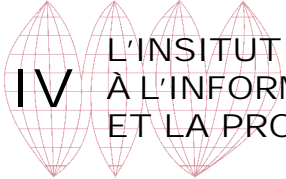
Phase 3 (Réponse, options de livraison et envoi) : La dépendance ou l'organisme fait connaître au demandeur d'information sur la réponse à sa requête. Dans le cas d'une réponse négative il l'informerait sur l'option de présenter une « Ressource de révision » devant l'IFAI. Si la réponse est affirmative, le « SISI » énumérera au demandeur les moyens dans lesquels peut reproduire l'information, les coûts de reproduction, ainsi que les différentes formes d'envoi et les coûts qui s'y rattachent. Le système émettra une fiche avec une « clé d'identification bancaire », par laquelle l'individu pourra effectuer le paiement.

Phase 4 (Notification de paiement) : Une fois effectué le paiement, la banque l'en informera automatiquement le « SISI », et par conséquent la dépendance ou l'organisme saura à tout moment quels demandeurs ont payé les quotes-parts de reproduction et de l'envoi correspondants, afin que l'on procède à la reproduction et l'envoi de l'information.

Phase 5 (Livraison ou envoi) : Quand la dépendance ou l'organisme aura reproduit et aura envoyé l'information sollicitée, le « SISI » informera le demandeur de la date à laquelle la dépendance ou l'organisme a effectué l'envoi et le numéro d'expédition. En tout cas, l'information sera gratuite si elle est livrée par voies électroniques.

Phase 6 (Ressource de révision) : Si le demandeur décide de présenter une « ressource de révision » à cause d'un refus d'accès à l'information, le « SISI » lui permettra de le faire par voie électronique. Le demandeur pourra aussi envoyer un document ou aller personnellement à l'IFAI. Dans ces deux derniers cas, l'IFAI incorporera d'abord les données du requérant dans le « SISI » et en suite étudiera le cas et notifiera le requérant dans le délai établi si la « ressource de révision » a eu lieu ou non. Pour sa part, la procédure de consultation ou de modification de données personnelles à travers du « SISI » requerra d'authentifier l'identité du demandeur.





L'INSTITUT FÉDÉRAL D'ACCÈS À L'INFORMATION PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

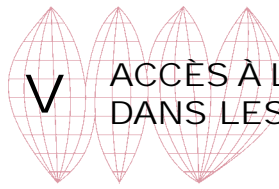
Selon l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits Humains « personne ne pourra faire l'objet d'ingérences arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques à son honneur ou à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques ». La démocratie se développe et se justifie par le respect de la vie privée des personnes qui en font partie. La reconnaissance de l'intimité et de l'autonomie de chaque individu sont des éléments nécessaires à la construction d'une société authentiquement libre.

La protection de données à caractère personnel trouve sa raison d'être, non dans la garantie de l'intimité de la vie privée, mais dans la possibilité de contrôler cette information pour protéger l'individu face au risque que suppose la transmission de ses données. La fraction II de l'Article 3 de la LFTAIPG décrit les données personnelles comme étant : « ... l'information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable, entre autre, en ce qui concerne à son origine ethnique, ou par rapport aux caractéristiques physiques, moraux ou émotionnels de l'individu, à sa vie affective et familiale, à son domicile, à son numéro téléphonique, à son patrimoine, à son idéologie et à ses avis politiques, à ses croyances ou à ses convictions religieuses ou philosophiques, à son état de santé physique ou mental, à son orientation sexuelle, ou autres analogues qui affectent son intimité ».

Pour accéder à l'information relative à des données personnelles, contenue dans des archives publiques, l'article 24 de la LFTAIPG stipule que seulement les intéressés ou leurs représentants pourront solliciter devant une « Unité de Liaison » l'accès à leurs données personnelles. L'information correspondante devra être livrée à l'intéressé dans une période de dix jours ouvrables et comptés depuis la présentation de la demande, en format compréhensible. Au cas où l'organisme ou la dépendance n'a pas dans ses archives les données personnelles du demandeur, l'organisme ou la dépendance devra le lui faire savoir par écrit dans la même période. Si l'autorité refuse de livrer ou corriger des données personnelles, viendra l'interposition de la « ressource de révision » devant l'IFAI. De même, la « ressource de révision » aura lieu dans le cas où l'autorité ne réponde pas dans les délais prévus par la Loi.

En accord avec l'Article 37 de la LFTAIPG, l'IFAI a entre ses attributions la capacité d'établir et réviser les critères de classification et garde de l'information « réservée » et confidentielle (fraction III) et d'établir les linéaments et les politiques générales pour le maniement, le maintien, la sécurité et la protection des données personnelles, qui sont en possession des dépendances et des organismes (fraction IX). En ce sens, l'IFAI est l'institution chargée de sauvegarder la protection des données personnelles et d'éviter la diffusion, la distribution ou la commercialisation des données personnelles contenues dans les systèmes d'information des dépendances et organismes.



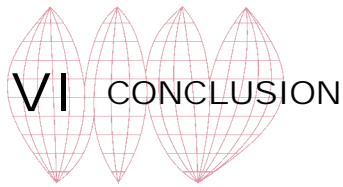


V ACCÈS À L'INFORMATION DANS LES ÉTATS ET LES MUNICIPALITÉS

L'IFAI vise à établir des relations de collaboration et d'appui avec les états et les municipalités du Mexique, dans le but d'échanger des expériences et de promouvoir l'accès à l'information, la protection de données personnelles et la transparence. Actuellement, treize États de la fédération mexicaine disposent des lois d'accès à l'information : Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Mexico, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí et Sinaloa. D'autres États (Chiapas, Hidalgo, Puebla et Veracruz) se trouvent en processus d'adopter des lois dans la matière. L'État de Colima, outre la législation d'accès à l'information a mis en vigueur une loi de protection de données personnelles - la première législation de ce type dans le cadre national -. En ce qui concerne le cadre local, les municipalités de Guadalajara, Monterrey, Querétaro et Torreón disposent d'un règlement de transparence et accès à l'information.

Des 32 États qui conforment la fédération mexicain, 13 disposent d'une loi d'accès à l'information






VI CONCLUSION

L'IFAI crée des mécanismes qui favorisent la transparence et la reddition de comptes au Mexique : Les obligations de transparence imposées par la LFTAIPG et vérifiées par l'IFAI placent le Mexique dans de meilleurs standards en la matière au niveau international. La section de la LFTAIPG sur la classification (Article 32) établit la création d'un registre de tous les documents produits par le gouvernement, ce qui permettra dans le futur de simplifier l'accès à l'information publique. D'autre part, la Loi clarifie que la période de « réserve » de l'information compte à partir du moment où l'information est produite et non à partir de la classification du document. Finalement, le traitement des coûts d'accès cherche à éviter que le paiement de la reproduction et de l'envoi d'information soit un obstacle pour la transparence.

La LFTAIPG et l'IFAI exercent des effets positifs pour le Mexique sur les milieux économique et politique. Sans doute, un État plus transparent sera par conséquent plus efficace. Cette amélioration dans l'efficacité de l'État se reflétera à long terme dans un renforcement du trésor public et aussi dans l'ensemble de l'économie. Ceci s'explique en considérant que les coûts associés à la corruption dans notre économie représentent déjà plusieurs points du pourcentage du produit interne brut. L'accès à l'information et la transparence vont contribuer à réduire la corruption et aideront à canaliser des ressources vers des activités productives et vers du développement social.

Dans le cadre politique et dans un processus de démocratisation, en garantissant le droit d'accès à l'information, l'IFAI participe à la consolidation démocratique parce qu'il force la reddition de comptes des dépendances et organismes gouvernementaux et ses employés aux citoyens. L'accès à l'information est une des tâches les plus importantes dans l'agenda démocratique national, car il favorise la vigilance des individus sur le gouvernement et il accroît la participation des citoyens à la prise de décisions publiques.



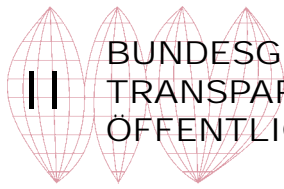


TRANSPARENZ UND ZUGANG ZU INFORMATION

Die achtziger Jahre waren gekennzeichnet durch politische Übergangsprozesse von autoritären Regimes in letztlich demokratische Systeme; die neunziger Jahre hingegen lassen sich als eine Zeit beschreiben, in der Transparenz und Zugang zur Information aufkamen. Obgleich die erste Gesetzgebung über Zugang zur Information auf das Jahr 1776 zurückgeht, in welchem in Schweden das *Gesetz über Pressefreiheit* verabschiedet wurde, sind diese beiden eng miteinander verbundenen Themen doch erst in den letzten zehn Jahren auf der politischen Agenda einer Vielzahl von Ländern in Erscheinung getreten. Gegenwärtig besitzen über vierzig Länder eine Gesetzgebung, welche den Zugang zu der in der Hand der Regierung befindlichen Informationen fördert, und in mehr als dreißig Ländern ist ein Prozess zur Ausarbeitung, Debatte und Verabschiedung derartiger Bestimmungen im Gange. Transparenz und Zugang zu öffentlichen Informationen sind zwei wesentliche Merkmale einer repräsentativen Regierung. In der Tat muss ein demokratisches System nicht nur eindeutige und verlässliche Regeln für den Wahlkampf und die Übernahme politischer Macht gewährleisten, sondern auch institutionelle Kanäle für den Zugang zur Information herstellen, damit die Gesellschaft in der Lage ist, das Gebaren der Regierung und die Arbeit der öffentlichen Verwaltung zu kennen und zu beurteilen; dies sollte regelmäßig und nicht nur im Rahmen von Wahlen möglich sein, sondern auch über andere Wege der Willensbekundung.

Transparenz und Zugang zur Information sind Mechanismen, die die Rechenschaftsablage —*accountability*— fördern und eine direkte Auswirkung auf die Verbesserung des demokratischen Systems haben, tragen sie doch dazu bei, dass eine Vielzahl von Akteuren – darunter insbesondere Nichtregierungsorganisationen, Zivilgesellschaft, der akademische Bereich und sogar die staatlichen Instanzen selbst – die Kosten senken, die mit der Überwachung und Kontrolle der Machtausübung einhergehen werden. Außerdem begünstigen Transparenz und Zugang zu öffentlicher Information die Entstehung von Kommunikationskanälen zwischen den staatlichen Institutionen und der Gesellschaft, durch die es der Wählerschaft möglich wird, die Regierungstätigkeit einer regelmäßigen, wohlinformierten, kritischen Beurteilung zu unterziehen.

Im Falle Mexikos geht die erste Annäherung an das Recht auf Zugang zur Information auf das Jahr 1977 zurück und ist in der Politischen Verfassung der Vereinigten Mexikanischen Staaten verankert. Artikel 6 und 8 der Verfassung erkennen das Recht auf Zugang zu Regierungsinformation bzw. das „Petitionsrecht“ an, auf Grund dessen jeder mexikanische Bürger berechtigt ist, Fragen zur Regierungstätigkeit zu stellen. Dabei muss jedoch zugegeben werden, dass in Ermangelung einer entsprechenden rechtlichen Regelung in dieser Materie der Zugang zur Information als eine Sache des Entgegenkommens der Behörden gehandhabt und dem guten Willen der Beamten sowie der physischen Verfügbarkeit der Information anheim gestellt war.



BUNDESGESETZ ÜBER TRANSPARENZ UND ZUGANG ZUR ÖFFENTLICHEN INFORMATION DER REGIERUNG

Die Verabschiedung des *Bundesgesetzes über Transparenz und Zugang zur öffentlichen Information der Regierung* (LFTAIPG) am 12. Juni 2002 sollte die durch das Fehlen einer spezifischen Reglamentierung des Zugangs zur öffentlichen Information entstandenen Mängel und Gesetzeslücken beheben. Mit der Verkündung des LFTAIPG hat Mexiko einen Prozess des Wandels in den Beziehungen zwischen Regierung und Regierten in die Wege geleitet und einen Schritt in Richtung auf eine neue Art und Weise der Ausübung öffentlicher Funktionen im Geiste der Offenheit gegenüber der Gesellschaft getan. Das durch diese Gesetzgebung gewährleistete Recht auf Information wird Mexiko in die Lage versetzen, Fortschritte in der Konsolidierung einer demokratischeren Regierung zu erzielen, in der sämtliche öffentlichen Vertreter und Staatsbediensteten gegenüber den Staatsbürgern zur Rechenschaft verpflichtet sind.

Das LFTAIPG räumt jeder Person den Zugang zu der Information ein, die sich im Besitz der Gewalten des Bundes, der autonomen Verfassungsorgane, der Bundesverwaltungsgerichte und sonstiger Organe der Bundesverwaltung befindet. Unter den Zielsetzungen des LFTAIPG sind hervorzuheben: "die transparente Gestaltung der öffentlichen Verwaltung und "die Erleichterung der Rechenschaftslegung gegenüber den Staatsbürgern", damit diese die Arbeit der Behörden und öffentlichen Gemeinwesen beurteilen können, sowie "einen Beitrag zur Demokratisierung der mexikanischen Gesellschaft und vollen Wirksamkeit des Rechtsstaates zu leisten" (LFTAIPG, Artikel 4). Die Verwirklichung dieser Ziele wird dazu beitragen, das Vertrauen der Bürger in die Regierungsinstitutionen zu stärken und wird sich auch dahingehend auswirken, dass die politischen Akteure sich in Bezug auf die Diskussionsprozesse und die Durchführung der öffentlichen Politik in stärkerem Maße verantwortlich fühlen.

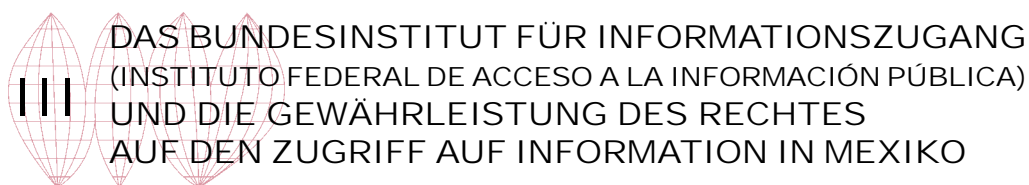
Das LFTAIPG ist ein wertvolles, wohl konzipiertes und gut formuliertes Gesetz mit eindeutigen Definitionen und Zielsetzungen zur Gewährleistung des Rechtes der Bürger auf Zugang zu der im Besitz der Regierung befindlichen Information. Es schreibt vor, dass jegliche Regierungsinformation öffentlichen Charakter habe (Artikel 2) und weist sämtliche Behörden und Regierungsstellen an, dem "Prinzip der Öffentlichkeit" (Artikel 6) gegenüber dem der Geheimhaltung¹ Vorrang einzuräumen. Es gewährt den Bürgern das Recht, mittels einfacher und schneller Verfahren Informationen anzufordern, die noch nicht öffentlich gemacht wurden (Artikel 40) und räumt jeglicher Person die Möglichkeit ein, Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Informationsverweigerung seitens einer Dienststelle einzulegen (Artikel 49), und die betreffende Dienststelle vor Gericht zu belangen, wenn die Revision zurückgewiesen wird.

¹ Lt. Artikel 13 des LFTAIPG können gewisse im Besitz der Regierung befindliche Informationen als „geheim“ angesehen werden, d.h. für eine gewisse Zeit Ausnahmen in Bezug auf Zugang und Verbreitung unterliegen, jedoch ausschließlich unter der Voraussetzung dass ihre Verbreitung, u. a, die Sicherheit Mexikos in Risiko setzen könnte.



Abgesehen von der Feststellung des öffentlichen Charakters praktisch aller von der Regierung hervorgebrachten oder besessenen Information, stellt das Gesetz eine Liste "Verpflichtungen zur Transparenz" auf, die jede Regierungsstelle Einzuhalten hat. Artikel 7 des Gesetzes verpflichtet die Regierungsstellen routinemäßig und leicht zugänglich sämtliche Informationen zu veröffentlichen, die sich auf deren Aufgaben, Haushalt, Betrieb, Personalliste, Gehältern, internem Berichtswesen, Vertragsabschlüssen und Konzessionen beziehen. Neben dem LFTAIPG schrieben die Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz vor, dass die Informationen, auf welche sich die "Verpflichtungen zur Transparenz" beziehen von sämtlichen Ämtern und Dienststellen der Öffentlichen Verwaltung des Bundes in regelmäßigen Abständen von drei Monaten auf den laufenden Stand zu bringen sind.

Die bloße Existenz einer Gesetzgebung über den Zugang zur öffentlichen Information der Regierung gewährleistet jedoch noch nicht eine wirksame Wahrnehmung des Rechts. In manchen Ländern sieht die Gesetzgebung keine Mechanismen vor; andere Regierungen wiederum schaffen Hindernisse oder nutzen Gesetzeslücken um sich der Verbreitung der in ihrem Besitz befindlichen Information zu widersetzen. Aus diesem Grund und mit dem Ziel, erfolgreich das Recht auf Informationszugang durchzusetzen, ist in manchen Gesetzgebungen die Schaffung automer Institutionen vorgesehen, die die Einhaltung der diesbezüglichen Bestimmungen überwachen sollen.



Das LFTAIPG sieht in Artikel 33 die Schaffung des *Bundesinstituts für Informationszugang* (IFAI) vor, welches offiziell im Juni 2003 seine Tätigkeit aufnahm. Dem IFAI obliegt es, im Bereich der Bundesexekutive für die Einhaltung des LFTAIPG zu wachen, die Wahrnehmung des Rechtes auf Informationszugriff zu fördern und zu verbreiten und einzuschreiten, wenn eine Behörde sich weigert, den Gesuchen auf Information stattzugeben. Daneben ist es Aufgabe des IFAI die Vertraulichkeit persönlicher Daten zu wahren, die sich im Besitz der staatlichen Dienststellen befinden. Um die Erfüllung seines Auftrags zu gewährleisten, hat das IFAI Befugnisse zur Beschlussfassung und Reglamentierung, Überwachung, Koordination, Förderung und Verbreitung sowie betrieblicher und administrativer Art.

Seit dem Bestehen des IFAI hat in Mexiko jeder an Informationen der Bundesregierung interessierte Bürger drei Möglichkeiten diese Information anzufordern:

1. Über das Zentrum zur Betreuung der Gesellschaft (Centro de Atención a la Sociedad) des IFAI, wo Computerterminals und entsprechend geschultes Personal zur Beratung und Orientierung zur Verfügung stehen
2. In der Regierungsstelle, von welcher er die Information wünscht. Dort kann er sich mit seinem Anliegen an eine besondere Dienststelle, die sogen. „Verbindungsstelle“ (Unidad de Enlace)

wenden. Jede Regierungsstelle ist gem. LFTAIPG verpflichtet, eine solche Dienststelle einzurichten, die dem Bürger alle erforderliche Unterstützung bei der Anforderung von Information gewähren muss

3. Von jedem beliebigen Ort des Landes und selbst vom Ausland aus, über das "Sistem zur Beantragung von Information" (Sistema de Solicitudes de Información - SISI), das über Internet unter der Anschrift <http://www.informacionpublica.gob.mx> kontaktiert werden kann.

Es ist erwähnenswert, dass dieser letztgenannte Zugriff auf Regierungsinformation über das SISI auch international betrachtet eine Innovation darstellt, da nur wenige Länder über einen so leicht zugänglichen Mechanismus zur Informationsanforderung über Internet verfügen. Das IFAI hat u.a. Beamte aus Kanada, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und Peru sowie aus anderen an der Übernahme von dem SISI vergleichbaren Informationssystemen interessierten Ländern beraten. Die elektronische Revolution hat den Zugriff zur Information wesentlich gewandelt.

Während der ersten sechs Monate —Juni bis Dezember 2003—, wurden mehr als 24.000 Anträge auf Information gestellt, von denen 93% über das SISI eingereicht wurden:

Anträge	Gesamt JUNI (12. - 30.)	Gesamt JULI	Gesamt AUGUST	Gesamt SEPTEMBER	Gesamt OKTOBER	Gesamt NOVEMBER	Gesamt DEZEMBER (01. - 11.)	Gesamtzahl
Elektronische Anträge	4,674	3,887	4,388	2,961	2,881	2,733	751	22,275
Manuelle Anträge	426	343	255	265	233	198	82	1,802
Gesamtzahl der Anträge	5,100	4,230	4,643	3,226	3,114	2,931	833	24,077
Elektronische Antworten	1,519	4,287	3,995	3,265	2,899	2,303	1,069	19,337
Manuelle Antworten	95	357	263	269	214	158	94	1,450
Gesamtzahl der Antworten	1,614	4,644	4,258	3,534	3,113	2,461	1,163	20,787
Revisionsanträge	17	83	69	145	146	103	44	607

Das SISI ist ein universelles System, das die Anträge auf Information und die persönlichen Daten entsprechend den Bestimmungen des LFTAIPG, seiner Ausführungsverordnung und den Richtlinien des IFAI verwaltet. Die Antragsteller, die zur Information Verpflichteten und das IFAI können das SISI in Anspruch nehmen, das sowohl dazu dient dem Institut selbst statistische Information zu liefern und den Jahresbericht zu untermauern, den das IFAI der Legislative vorzulegen hat.

Indem es sämtliche Informationsanträge, unabhängig von der Art und Weise, wie sie eingereicht werden, d.h. über Internet, auf dem Postweg oder persönlich durch den Antragsteller vor der betreffenden Verbindungsstelle, in Dokumenten erfasst, die den Regierungsstellen vorliegen, hat sich das SISI zu dem effizientesten Kommunikationsmittel zwischen der Gesellschaft, den Regierungsstellen und dem IFAI entwickelt.

Der Arbeitsprozess des SISI erstreckt sich über sechs Etappen von der Vorlage des Antrags auf Information, über die interne Bearbeitung bis zur Aushändigung der Information und einem möglichen Antrag auf Revision, der vor dem IFAI eingebracht werden kann:

Phase 1: Antrag – Der Antragsteller muss entweder beim SISI seinen Antrag einbringen oder einen Vordruck ausfüllen, den er per Post einsenden oder persönlich bei der Verbindungsstelle einreichen kann, wo die Anfrage in das System eingegeben wird. In jedem Fall weist das SISI dem Antrag eine Nummer zu, unter welcher er weiter verfolgt werden kann.

Phase 2: Entgegennahme und Recherche – Die betroffene Regierungsstelle nimmt den Antrag entgegen und reicht ihn an die zuständige Verwaltungseinheit weiter, welche festzustellen hat, ob die Information vorliegt und ob sie öffentlichen, geheimen oder vertraulichen Charakter hat. Sofern die Information vorliegt und öffentlich ist, leitet die Verwaltungseinheit sie an die Verbindungsstelle weiter und gibt gegebenenfalls an, welche Kosten je nach Übergabemodalität entstehen.

Phase 3: Antwort, Übergabe- und Versandoptionen – Die Regierungsstelle benachrichtigt den Antragsteller von der Beantwortung seines Antrags. Sofern diese negativ ausfällt, klärt sie den Antragsteller über die Möglichkeit auf, vor dem IFAI Beschwerde einzulegen. Im Falle eines positiven Bescheides unterrichtet das SISI den Antragsteller über die Art und Weise wie die Information wiedergegeben werden kann, welche Kosten dadurch entstehen sowie die Zustellungsmodalitäten und ihre Kosten. Das System stellt eine Karte mit einer Bank-Kennzahl aus, mit der die Zahlung vorgenommen werden kann.

Phase 4: Zahlungsmittelung – Sobald die Zahlung erfolgt ist, geht eine entsprechende Mitteilung automatisch an das SISI; somit weiss die betroffene Regierungsstelle jederzeit, welche Antragsteller die Gebühren für die Wiedergabe und Zustellung der Information beglichen haben und kann diese kopieren und zusenden.

Phase 5: Aushändigung oder Zustellung – Wenn die betreffende Regierungsstelle die gewünschte Information vervielfältigt und zugestellt hat, teilt das SISI dem Antragsteller mit, an welchem Datum der Versand erfolgte, sowie gegebenenfalls die Nummer des Begleitscheines. Die Information ist kostenlos wenn sie auf elektronischem Wege übermittelt wird.

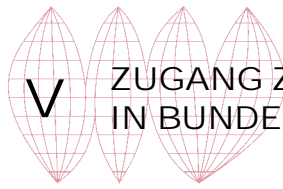
Phase 6: Rechtsmittel – Sofern der Antragsteller im Falle eines negativen Bescheids beschliesst, einen Antrag auf Revision zu stellen, bietet ihm das SISI die Möglichkeit, dies auf elektronischem Wege zu tun. Der Antragsteller kann jedoch auch ein Schriftstück einsenden oder persönlich beim IFAI vorstellig werden. In diesen beiden Fällen speist das IFAI die Daten des Antrags in das SISI ein.

Gemäß Artikel 12 der Erklärung über die Menschenrechte darf "niemand Gegenstand von willkürlichen Einmischungen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder sein Korrespondenz, oder von Angriffen gegen seine Ehre oder seinen Ruf. Jede Person ist berechtigt, den Schutz des Gesetzes gegen derartige Eingriffe oder Angriffe anzurufen". Die Entwicklung und Rechtfertigung der Demokratie stützt sich auf die Achtung der Privatsphäre der Personen, die ihr angehören. Nur auf der Grundlage der Anerkennung des Privatlebens und der Autonomie eines jeden Bürgers kann eine wahrhaft freie Gesellschaft entstehen.

Der Schutz persönlicher Daten findet seine Begründung nicht im Schutz der Privatsphäre der Personen, sondern in der Möglichkeit, diese Information zu kontrollieren, um die Person gegen die Risiken zu schützen, die sich aus der Sammlung und Übertragung ihrer Daten ergeben. Artikel 3, Absatz II des LFTAIPG definiert persönliche Daten als "[...] die Information über eine natürliche, bestimmte oder bestimmbare Person, die sich u.a. auf ihren ethnischen oder rassischen Ursprung beziehen oder auf körperliche, moralische oder emotionale Merkmale, auf ihr Geühls- und Familienleben, ihre Anschrift, Telefonnummer, Vermögen, Ideologie und politische Ansichten, Glauben, religiöse oder philosophische Überzeugungen, körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand, sexuelle Neigungen sowie alle anderen, die ihr Privatleben betreffen."

Bezüglich des Zugriffs auf die in öffentlichen Archiven vorliegenden persönlichen Daten bestimmt Artikel 24 des LFTAIPG, dass nur die betroffene Person oder deren Vertreter Zugang zu denselben haben können. Die entsprechende Information ist dem Interessenten innerhalb von zehn Werktagen nach Vorlage des Antrags in einem verständlichen Format auszuhändigen; ansonsten ist ihm schriftlich mitzuteilen, dass in dem System keinerlei persönliche Daten des Antragstellers gespeichert sind. Im Falle der Verweigerung der Aushändigung oder Korrektur persönlicher Daten kann ein Antrag auf Revision vor dem IFAI gestellt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass die Antwort nicht innerhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist erfolgt.

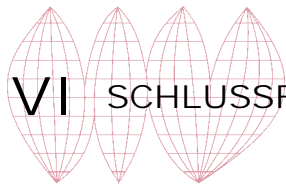
Gemäß Artikel 37 des LFTAIPG gehört es zu den Befugnissen des IFAI die Kriterien für die Sperrung, Freigabe und Verwahrung von geheimer und vertraulicher Information festzulegen und zu revidieren (Absatz III) sowie die Richtlinien und allgemeinen Politiken für die Handhabung, Pflege, Sicherung und Schutz der persönlichen Daten, die sich im Besitz staatlicher Ämter und Dienststellen befinden (Absatz IX).



V ZUGANG ZU INFORMATION IN BUNDESSTAATEN UND GEMEINDEN

Das IFAI bemüht sich darum, mit den Bundesstaaten und Gemeinden Beziehungen der Kooperation und Unterstützung herzustellen, mit dem Ziel, den Erfahrungsaustausch und die institutionelle und normative Entwicklung in Fragen der Transparenz, des Zugangs zu Information und des Datenschutzes zu fördern. Derzeit haben dreizehn mexikanische Bundesstaaten Gesetze über den Zugang zur Information, nämlich Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa. In andere Staaten (z.B. Chiapas, Hidalgo, Puebla und Veracruz) ist ein entsprechender Gesetzgebungsprozess in Gange. Unter den Bundesstaaten verdient Colima besondere Erwähnung, denn dort wurde neben dem Gesetz über Zugang zu Information auch ein Gesetz zum Schutz persönlicher Daten in Kraft gesetzt; dieses stellt die erste einschlägige Gesetzgebung im ganzen Land dar. Auf lokaler Ebene verfügen die Stadtverwaltungen von Guadalajara, Monterrey, Querétaro und Torreón über eine Verordnung zum Thema Transparenz und Informationszugriff.





VI SCHLUSSFOLGERUNG

Das IFAI ist damit befasst, Mechanismen ins Leben zu rufen, die die Transparenz und Rechenschaftsleistung in Mexiko fördern: Die Verpflichtungen zur Transparenz, die das LFTAIPG vorschreibt und das IFAI überprüft, tragen dazu bei, die Reichweite dieses Themas erkenntlich zu machen und siedeln Mexiko innerhalb der höchsten internationalen Standards an. Der Abschnitt, der sich mit der Einordnung der Information befasst, sieht die Schaffung eines Registers sämtlicher von der Regierung erstellter Dokumente vor, was in Zukunft den Zugriff auf öffentliche Information erleichtern wird. Andererseits wird darin klargestellt, dass die Sperrfrist für geheime Information ab deren Entstehen und nicht ab der Einstufung des Schriftstücks zählt. Bei der Erhebung der Gebühren wird darauf geachtet, dass die Kosten der Vervielfältigung und des Versands der Information nicht zu einem Hindernis für die Transparenz wird

LFTAIPG und IFAI haben im wirtschaftlichen und politischen Bereich positive Auswirkungen für Mexiko. Ohne jeden Zweifel ist der transparentere Staat auch ein effizienterer. Diese Verbesserung der staatlichen Effizienz wird sich nicht nur auf längere Sicht in einer Stärkung des öffentlichen Haushalts und damit des Vermögens aller Mexikaner niederschlagen, sondern auch in der Wirtschaft insgesamt. Dies erklärt sich aus dem Umstand dass die Kosten der Korruption in unserer Volkswirtschaft sich auf mehrere Prozent des Bruttoinlandprodukts belaufen. Bei einem Rückgang der Korruption können diese Mittel für produktive und soziale Aufgaben eingesetzt werden.

In politischer Hinsicht und im Rahmen eines Demokratisierungsprozesse fördert das IFAI durch die Gewährleistung des Zugangs zur Information die demokratische Konsolidierung, in der jeder einzelne Beamte den Bürgern Rechenschaft schuldet. In dem Einverständnis, dass die Demokratie als partizipative Regierungsform von der Fähigkeit des informierten Bürgers zur Mitwirkung am öffentlichen Geschehen abhängig ist, stellt die Ermöglichung des Zugangs zur Information eine der wichtigsten Aufgaben auf der demokratischen Agenda der Nation dar. Auf diese Weise wirkt das IFAI zum Aufbau und der Verstärkung der Rechenschaftslegung bei, wirkt auf eine höhere Effizienz der Verwaltung hin und schafft geeignete Bedingungen für eine Überwachung der Regierung durch die Bürger.





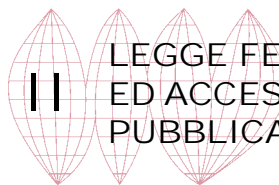
TRASPARENZA ED ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Il decennio degli anni ottanta si è caratterizzato per le transizioni politiche di regimi autoritari verso sistemi eventualmente democratici; i novanta si possono identificare come il periodo “dell'emergenza della trasparenza e l'accesso all'informazione”. Anche la prima legislazione in materia d'accesso all'informazione è avvenuta nel 1776, anno in cui la Svezia approvò la Legge di Libertà di Stampa, non è fino agli ultimi dieci anni quando questi due temi –intimamente collegati– sono stati incassati nell'agenda politica d'un gran numero di paesi. Attualmente più di quaranta paesi contano con legislazioni che promuovono l'accesso all'informazione in possesso del governo e più di trenta si trovano nel processo d'elaborazione, deliberazione o approvazione di quella regolamentazione. La trasparenza e l'accesso all'informazione pubblica sono due qualità fondamentali d'un governo rappresentativo. Infatti, un sistema democratico, in oltre di garantire regole chiare e affidabili per la concorrenza elettorale e la promozione al potere, deve essere anche per assortire canali istituzionali d'accesso all'informazione che permettano alla società conoscere e valutare –periodicamente e non solo attraverso del suffragio, ma anche mediante altre maniere d'esprimere preferenze– la gestione governamentale e il disimpegno dei servitori pubblici.

La trasparenza e l'accesso all'informazione sono due meccanismi che promuovono il resoconto –*accountability*– e tutti e due concorrono direttamente nel perfezionamento del sistema democratico, dunque, concorrono a che una molteplicità d'attori –tra i cui distaccano gli organizzazioni non governamentali, la società civile, l'ambito accademico e incluso, i propri poteri dello Stato– diminuiscano i costi associati al controllo e vigilanza dell'esercizio del potere. Così, la trasparenza e l'accesso all'informazione pubblica governamentale favoriscono la creazione di canali di comunicazione tra l'istituzioni dello Stato e la società, e permette alla cittadinanza realizzare uno scrutinio critico, ben informato e periodico sull'esercizio governamentale.

Nel caso del Messico, la prima approssimazione al diritto d'accesso all'informazione data dal 1977 ed è iscritta nella Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani. Gli articoli costituzionali sesto e ottavo, riconoscono rispettivamente, il diritto all'ottenzione d'informazione governamentale e il “diritto di petizione” che facoltizza a qualsiasi cittadino messicano a fare consulte attenenti alle attività governamentali. È necessario riconoscere, comunque, che davanti all'assenza di una regolamentazione giuridica applicabile nella materia, l'accesso all'informazione è rimasta come una concessione graziosa dell'autorità, soggetta alla buona volontà dei servitori pubblici ed alla disponibilità fisica dell'informazione.





II LEGGE FEDERALE DI TRASPARENZA ED ACCESSO ALL'INFORMAZIONE PUBBLICA GOVERNAMENTALE

Il promulgamento della Legge Federale di Trasparenza ed Accesso all'Informazione Pubblica Governamentale (LFTAIPG) -12 giugno di 2003- ha la finalità di mendare le deficienze e i cavi legali derivati dell'assenza d'una regolamentazione specifica in materia d'accesso all'informazione pubblica. Con la spedizione della LFTAIPG, Messico ha impresso un processo di cambio nella relazione tra il governo e i governati ed ha avanzato verso una nuova maniera d'esercizio della funzione pubblica, con le porte aperte e di fronte alla società. Il diritto d'accesso all'informazione, garantizzato attraverso di questa legislazione, permetterà al Messico avanzare nella consolidazione di un governo più democratico nel che tutti e ogni uno dei servitori pubblici e rapresentanti pubblici dovranno rendere conti ai cittadini.

La LFTAIPG istituisce l'accesso dell'individuo all'informazione in possesso dei Poteri de la Unione, degli organi costituzionali autonomi, dei tribunali amministrativi federali e di più organi federali. Tra gli obbiettivi della LFTAIPG distaccano: "trasparentare la gestione pubblica", "favorire il resoconto ai cittadini" di modo che possano valutare il disimpegno dell'entità del governo, e "concorrere alla democratizzazione della società messicana e la piena validità dello Stato di diritto" (LFTAIPG, Articolo 4). La consecuzione di queste mete concorrerà ad incrementare la confidenza della cittadinanza nelle istituzioni governamentali ed incorrerà anche negli attori politici, per fargli essere ogni volta più responsabili circa ai processi di deliberazione ed esecuzione delle politiche pubbliche.

La LFTAIPG è una legislazione efficace, ben concepita, ben articolata, ed indiscutibile nelle sue definizioni ed obbiettivi per garantire il diritto degli individui ad ottenere informazione in possesso del governo. Stabilisce che tutta l'informazione governamentale è di carattere pubblico (Articolo 2), e comanda a tutte le dipendenze ed entità del governo a favorire il "principio della pubblicità" (Articolo 6) sopra la riserva.¹ Li concede agli individui il diritto di chiedere informazione che ancora non si è fatta pubblica attraverso di procedimenti semplici e spediti (Articolo 40). Nello stesso modo conferisce a qualsiasi persona il diritto d'appellare contra la decisione d'una entità di rifiutare l'informazione (Articolo 49), e conferisce anche il diritto di portare all'entità a giudizio avanti ai tribunali se l'appello di revisione interposto è rifiutato.

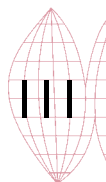
¹ D'accordo col Articolo 13 della LFTAIPG, alcuna informazione in possesso del governo può considerarsi come "riservata"; questo vuol dire, che alcuna informazione si può trovare temporalmente soggetta ad eccezioni d'accesso e diffusione se, e soltanto se, la sua diffusione potesse:

- I) Compromettere la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
- II) Malmenare la conduzione delle negoziazioni o, delle relazioni internazionali, compresa quell'informazione che altri stati u organismi internazionali consegnino con carattere confidenziale allo Stato messicano;
- III) Dannare la stabilità finanziaria, economica o monetaria del paese.
- IV) Ponga in rischio la vita, la sicurezza o la salute di qualsiasi persona, o
- V) Causare un serio danno alle attività di controllo dell'esecuzione delle leggi, prevenzione o persecuzione dei delitti, la impartizione di giustizia, l'esattoria delle contribuzioni, le operazioni di controllo migratorio, le strategie procesali in processi giudiziari o amministrativi mentre le risoluzioni non causano esecutoria.



Più in là di stabilire il carattere pubblico di quasi tutta l'informazione che possiede e genera il governo, la Legge dispone un elenco di "obbligazioni di trasparenza" che ogni dipendenza ed entità deve osservare. L'Articolo 7 della Legge obbliga alle entità a pubblicare, di maniera abituale ed ottenibile, tutta quella informazione attinente alle funzioni quotidiane, bilancio, operazioni, direttorio del personale, stipendi, rapporti interni, e celebrazione di contratti e conferimenti. In più alla LFTAIPG, il Regolamento della Legge impone il decreto preciso di aggiornare l'informazione attinente alle "obbligazioni di trasparenza" di tutte ed ogni una delle dipendenze ed entità dell'Amministrazione Pubblica Federale in periodi che vanno da tre mesi ad un anno.

La stessa esistenza d'una legislazione in materia d'accesso all'informazione pubblica governamentale, bensì, non garantisce la pratica effettiva del diritto cittadino d'accedere all'informazione. In alcuni paesi la legislazione non prevede meccanismi che rafforzino l'accesso all'informazione; altri governi creano difficoltà o approfittano cavi legali per oporsi a diffondere la informazione che hanno nel suo potere. Per queste ragioni e per avanzare esitosamente nell'esecuzione del diritto ad accedere all'informazione, alcune legislazioni prevedono la creazione d'istituzioni autonome incaricate di controllare l'osservanza della legislazione d'accesso all'informazione in possesso del governo.



ISTITUTO FEDERALE D'ACCESSO
ALL'INFORMAZIONE PUBBLICA (IFAI)
E LA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO
D'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE NEL MESSICO

La Legge Federale di Trasparenza ed Accesso all'Informazione Pubblica Governamentale considera nel suo Articolo 33, la creazione dell'Istituto Federale d'Accesso all'Informazione Pubblica, il quale ha cominciato ad operare ufficialmente in giugno del 2003. L'IFAI é incaricato di compiere e fare compiere la LFTAIPG nell'ambito del Potere Esecutivo, é l'istanza incaricata di promuovere e diffondere l'esercizio del diritto d'accesso all'informazione, e di risolvere la negativa dell' autorità a dare risposta alle sollecitudini d'accesso all'informazione. Nello stesso modo, l'IFAI ha il mandato di salvaguardare la confidenzialità dei dati personali in potere delle dipendenze od entità del governo. Per garantire l'esecuzione del suo incarico, l'IFAI ha la facoltà di eseguire funzioni di risoluzione e regolazione, di vigilanza e cordinazione, d'operazione ed amministrazione, e di promozione e diffusione.

Nel Messico, dall'instaurazione dell'IFAI, qualsiasi persona interessata in sollecitare informazione in possesso del governo federale può chiederla di tre forme:

1. Accorrendo al Centro d'Attenzione alla Società dell'IFAI, il quale dispone delle computer e personale qualificato per orientarli ed assistirli.
2. Presentandosi direttamente nel Ministero di Stato o dipendenza del governo del quale si vuole ottenere informazione. L'individuo deve accorrere ad un'ufficio speciale d'attenzione a cui si appella "Unità di Collegamento". Ogni dipendenza, per comando della LFTAIPG, deve contare con uno di questi uffici, i cui devono offrire tutta l'orientazione necessaria per soddisfare la sollecitudine d' informazione.

3. Da qualsiasi parte del paese e, incluso dell'estero, attraverso del "Sistema di Sollecitudini d'Informazione" (SISI), al quale si può accedere via Internet nell'indirizzo elettronico: <http://informacionpublica.gob.mx>

È importante distaccare che quest'ultimo meccanismo d'accesso all'informazione in possesso del governo, il SISI, è una innovazione a livello internazionale, perchè pochi paesi contano con un mezzo così accessibile che permette ai cittadini richiedere l'informazione pubblica governamentale attraverso l'Internet. L'IFAI ha consigliato a funzionari pubblici del Canada, della Germania, del Regno Unito, della Repubblica Ceca e del Peru, tra altri paesi interessati in adottare sistemi d'accesso all'informazione similari al SISI. La rivoluzione elettronica ha affettato l'accesso all'informazione ed ha converso al governo in un disseminatore d'informazione, rivendicando così i valori che adesso appoggiano le provviste del governo aperto. L'IFAI è immerso in questa corrente e facilita l'accesso della cittadinanza all'informazione in possesso del governo attraverso i mezzi di comunicazione remota, com'è il caso del SISI.

In sei mesi d'operazioni — giugno a dicembre del 2003—, si sono presentate più di 24,000 sollecitudini d'informazione, di cui il 93% si sono fatte attraverso il SISI:

Sollecitudini	Totale Giugno (12 -30)	Totale Luglio	Totale Agosto	Totale Settembre	Totale Ottobre	Totale Novembre	Totale Dicembre (01-11)	Totale
Sollecitudini elettroniche	4,674	3,887	4,388	2,961	2,881	2,733	751	22,275
Sollecitudini scritte	426	343	255	265	233	198	82	1,802
Totale di sollecitudini	5,100	4,230	4,643	3,226	3,114	2,931	833	24,077
Risposte elettroniche	1,519	4,287	3,995	3,265	2,899	2,303	1,069	19,337
Risposte scritte	95	357	263	269	214	158	94	1,450
Totale di risposte	1,614	4,644	4,258	3,534	3,113	2,461	1,163	20,787
Appelli di revisione	17	83	69	145	146	103	44	607

Il SISI è un sistema universale che gestiona le sollecitudini d'informazione e di dati personali, d'accordo con quello stabilito nella LFTAIPG, il suo regolamento ed i lineamenti emessi per l'IFAI. I sollecitatori, i soggetti obbligati e l'IFAI possono fare uso del SISI, il quale permette fornire informazione statistica al proprio Istituto e serve come appoggio dell'Informe Annuale che le autorità dell'IFAI devono presentare al Potere Legislativo.

Il SISI si è eretto come il mezzo di comunicazione più efficiente tra la società, le dipendenze, le entità, e l'IFAI, al registrare tutte le sollecitudini d'accesso all'informazione in documenti che stanno in possesso delle entità dell'amministrazione pubblica federale, indipendentemente della forma come la presenta il sollecitatore, via Internet, la posta o fisicamente avanti "all'Unità di Collegamento" corrispondente.



Il SISI funziona attraverso di sei tappe che costituiscono il processo d'accesso all'informazione, dacchè la persona inserisce la sollecitudine, passando per il processo interno di trattamento della richiesta, finché alla consegna dell'informazione e l'eventuale Appello di revisione interposto avanti all'IFAI:

Fase 1: Sollecitudine – La persona deve fare la sua sollecitudine nel SISI, o riempire un formato in carta che può essere spedito via la posta o consegnato personalmente all'Unità di Collegamento dove sarà catturata nel sistema. In tutti i casi il SISI assegna un numero di foglio per dare inseguimento alla sollecitudine.

Fase 2: Ricezione e ricerca – La dipendenza o l'entità riceve la sollecitudine e la spedisce all'Unità amministrativa corrispondente, per cercare se esiste l'informazione e se il suo carattere è pubblico, riservato o confidenziale. Se l'informazione esiste ed è pubblica, l'unità amministrativa la rinvia all'Unità di Collegamento e stabilisce, di essere necessario, il costo d'accordo con le modalità di consegna.

Fase 3: Risposta, scelta di consegna ed invio – La dipendenza o entità notifica al sollecitatore sulla risposta alla sua sollecitudine. Nel caso di essere negativa l'informarà sull'opzione di presentare un appello avanti all' IFAI. Nel caso di essere affermativa, il SISI informarà al sollecitatore sui mezzi in cui l'informazione può essere riprodotta, i costi della riproduzione, le diverse forme d'invio e i suoi costi. Il sistema emetterà una scheda con una chiave d'identificazione bancaria, mediante la quale si potrà fare il pagamento.

Fase 4: Notificazione del pagamento – Non appena realizzato il pagamento, il banco avviserà automaticamente al SISI, e in questo modo la dipendenza o entità saprà in tutto momento, chi dei sollecitatori hanno coperto le quote di riproduzione e d'invio corrispondenti, col fine a procedere alla riproduzione ed invio dell'informazione.

Fase 5: Consegna ed invio – Quando la dipendenza o entità abbia riprodotto ed inviato l'informazione sollecitata, il SISI informarà al sollecitatore la data in cui si è realizzato l'invio, e per caso il numero di guida. L'informazione sarà gratuita sempre che sia consegnata attraverso di mezzi elettronici.

Fase 6: Ricorso – Se il sollecitatore decide presentare un appello di controllo per rifiuto alla sua richiesta, il SISI li permetterà farlo via elettronica. Il sollecitatore potrà anche inviare uno scritto od accorrere personalmente all'IFAI. In questi due ultimi casi, l'IFAI incorporerà i dati del sollecitatore nel SISI. L'IFAI studierà il caso e notificarà al sollecitatore dentro del termine stabilito. Da un'altra parte, il procedimento di consultazione o modificazione dei dati personali attraverso il SISI richiederà l'autenticazione dell'identità del sollecitatore.

D'accordo col articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani "nessuno potrà essere oggetto d'ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, la sua famiglia, il suo domicilio o il suo carteggio, né d'attacchi al suo onore od alla sua reputazione. Ogni persona ha il diritto alla protezione della legge contra tali ingerenze od attacchi". La democrazia si sviluppa e giustifica nel rispetto della privacy delle persone che formano parte di lei. Soltanto dall'ambito di riconoscimento dell'intimità ed autonomia di ogni cittadino può costruirsi una società autenticamente libera.

La protezione di dati di carattere personale trova la sua ragione di essere, non nella sicurezza dell'ambito intimo della vita privata, se no nella possibilità di controllare quest'informazione per assicurare all'individuo avanti al rischio che supporre l'incetta e la trasmissione di suoi dati. La frazione II dell'Articolo 3 della LFAIPG define ai dati personali come "[...] l'informazione concernente ad una persona fisica, identificata od identificabile, tra altra, l'attene al suo origine etnico o raziale, o che si trova riferita alle caratteristiche fisiche, morali od emozionali, alla sua vita affettiva e familiare, domicilio, numero telefonico, patrimonio, ideologia ed opinioni politiche, credenze o convizioni religiose o filosofiche, gli stati di salute fisici e mentali, le preferenze sessuali, ed oltre analoghe che affettino la sua intimità.

Per accedere all'informazione attene a dati personali, contenuta negli archivi pubblici, l'articolo 24 della LFAIPG disporre che soltanto gli interessati o suoi rappresentanti potranno sollecitare avanti ad una unità di collegamento l'accesso a suoi dati personali che operano nelle basi di dati governamentali. L'informazione rispettiva dovrà essere consegnata all'interessato tra il termine di dieci giorni abili contati dalla presentazione della sollecitudine, in formato capibile, o pure, si li comuniccherà in iscritto che quel sistema di dati personali non contiene i riferiti al sollecitatore. Se esiste rifiuto di consegnare o correggere dati personali, procederà l'interposizione dell'appello di revisione avanti all'IFAI. Nello stesso modo, procedrà nel caso di carenza di risposta nei termini previsti per la legge.

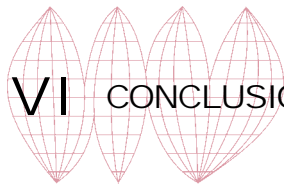
D'accordo col articolo 37 della LFAIPG, l'IFAI ha tra le sue facoltà stabilire e revisar i criteri di classificazione, sclassificazione e consegna dell'informazione riservata e confidenziale (frazione III) ed stabilire i lineamenti e politiche generali per il maneggio, mantenimento, sicurezza e protezione dei dati personali, che stano in possesso delle dipendenze ed entità (frazione IX). In questo senso, l'IFAI è l'istituzione incaricata di risguardare la protezione dei dati personali ed evitare la diffusione, distribuzione o commercializzazione dei dati personali contenuti nei sistemi d'informazione dei soggetti obbligati.

V ACCESSO ALL'INFORMAZIONE NELLE REGIONI E MUNICIPI

L'IFAI cerca promuovere e stabilire relazioni di collaborazione ed appoggio con le regioni e municipi, col proposto di scambiare sperienze ed impellare lo sviluppo normativo ed istituzionale in materia di trasparenza, accesso all'informazione e dati personali.

Tredici regioni della federazione contano con leggi d'accesso all'informazione: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacàn, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa. Altre regioni più (Chiapas, Hidalgo, Puebla e Veracruz, tra altre), si trovano nel processo d'adottare leggi nella materia. Tra le regioni, distacca Colima perchè in più, conta con una legge di protezione di dati personali, -la prima a livello nazionale-. Sull'ambito locale, i municipi di Guadalajara, Monterrey, Querétaro e Torreón contano con un regolamento di trasparenza ed accesso all'informazione.





VI CONCLUSIONE

L'IFAI sta creando meccanismi conducenti a fomentare la trasparenza e il resoconto nel Messico: le obbligazioni di trasparenza imposte per la LFTAIPG e controllate per l'IFAI concorrono a chiarificare i raggiungimenti di questo tema e situano al Messico nei migliori posti nella materia a livello internazionale. L'appartato sulla classificazione stabilisce la creazione di un registro di tutti i documenti che genera il governo, il quale permetterà nel futuro semplificare l'accesso all'informazione pubblica. Daltronde, chiarisce che il periodo di riserva dell'informazione conta da quando la informazione si genera e non da quando si classifica il documento. Finalmente, il trattamento delle quote d'accesso cerca evitare che il pagamento per la riproduzione ed invio d'informazione sia un ostacolo per la trasparenza.

La LFTAIPG ed l'IFAI generano effetti positivi per il Messico negli ambiti economico e politico. Senz'altro, uno Stato più trasparente sarà in conseguenza più efficiente. Questo miglioramento nell'efficienza statale non solo si vedrà nel lungo termine nel fortificamento del tesoro pubblico, che è di tutti i messicani, se no anche dell'economia nel complesso. Cioè si spiega al considerare che i costi che rappresenta la corruzione per la nostra economia salgono in vari punti percentuali del PIB. Al diminuire la corruzione, questi risorsi si potrebbero canalizzare ad attività produttive e sociali.

Nell'ambito politico e nel processo di democratizzazione, al garantire il diritto d'accesso all'informazione l'IFAI favorisce il processo di consolidazione democratica nel che tutti ed ogni uno dei servitori pubblici dovranno rendere conti ai cittadini. L'accesso all'informazione è uno dei compiti più importanti dell'agenda democratica nazionale, nell'inteso che la democrazia, come forma di partecipazione nel governo, dipende della capacità dei cittadini per partecipare nell'ambito pubblico. Così, l'IFAI ha un importante ruolo nella costruzione e rinforzamento del resoconto, concorre nella efficienza amministrativa e crea condizioni atte perché i cittadini controllino l'ambito governamentale.






TRANSPARÊNCIA E ACESSO DE INFORMAÇÃO

A década dos oitenta caracterizou-se pelas transições políticas dos regimes autoritários a os sistemas quando necesario democráticos, os noventa podem ser identificados como o período da emergência da transparência e do acesso para a informação. Ainda que a primeira legislação na materia do acesso a informação teve lugar em 1776, ano qual Suecia aprovou a chamada Lei da Liberdade da Prensa não foi até os últimos 10 anos quando os dois temas –unidos entre si- já estão na agenda política de um grande número de países. Atualmente mais de 40 países contam con legislações que promovem ao acesso da informação, quais estão na possessão do governo e mais de 30 países, encontram-se no processo da elaboração, deliberação ou aprovação daqueles regulamentos. A transparência e o acesso para a informação pública estão como as duas qualidades fundamentais de um governo representativo. En efeito, um sistema democrático, ademais de garantir normas claras e confiáveis para a competencia eleitoral e o ascenso ao poder, também debe prover de canais institucionais de acesso para a informação que permitam que este conhecimento se da para a sociedade e notificar periódicamente e não só por meio de votos se não, -também por meio de outras formas de expresar preferencias- como a medida do governo e o desempenho dos trabalhadores públicos.

A transparência e o acesso para a informação são dois mecanismos que promovem a rendição de contas -accountability- e ambos indicam diretamente no aperfeiçoamento do sistema democrático, pois contribuem a que múltiples atores- entre os quais destacam os organismos não governamentais, a sociedade civil, o académico e, inclusive os propios poderes do Estado- diminuir os custos associados na supervisão y vigiância do exercicio do poder. Esta mesma, a transparência e o acesso da informação pública governamental favorecem a criação de canais de comunicação entre as instituições do Estado e a sociedade, as quais permitem que as pessoas realizem uma investigação crítica, bem informada e periódica sobre o exercicio governamental.

No caso do México, a primeira vez que tiveram acesso para a informação, se data de 1977 e está escrita na Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. Os artigos constitucionais Sexto e Oitavo reconhecem, o direito da obtenção da informação governamental e o direito de pedido o petição que faculta a qualquer pessoa mexicana para realizar as consultas relativas das atividades governamentais. E necessário reconhecer, assim, que ante a ausencia de uma regulamentação jurídica aplicada na materia, o acesso a informação ficou como uma concessão da autoridade, sujeita a boa fé dos trabalhadores públicos e a disponibilidade física da informação.





LEI FEDERAL DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO PARA A INFORMAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL

A promulgação da Lei Federal de Transparência e Acesso para a Informação Pública Governamental (LFTAIPG) –12 de junho do 2002– tem a finalidade de arranjar as deficiências e vazios legais derivados da ausência de uma regulamentação específica em matéria de acesso para a informação pública. Com a expedição da LFTAIPG, México empreendeu um processo de cambio na relação entre o Governo e os governados, e avançou numa nova forma de exercício da função pública, com as portas abertas e de cara para a sociedade. O direito de acesso para a informação, garantizado por meio desta legislação, permitira que o México caminhe na consolidação de um governo mais democrático no qual todos e cada um dos trabalhadores públicos e representantes públicos deverão render contas aos cidadãos.

A LFTAIPG institui o acesso de todo individuo na informação, que estão na posse dos Poderes da União, os organismos constitucionais autónomos, os tribunais administrativos federais e demais organismos federais. Entre os objetos da LFTAIPG destacam: “transparentar o gesto público”, “favorecer a rendição das contas para os cidadãos”, de maneira que possa avaliar o desempenho das entidades do governo, e, “contribuir na democratização da sociedade mexicana e da plena vigência do estado de direito” (LFTAIPG, artigo 4). Seguir estas metas contribuirá para incrementar a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais e também incidirá em que os atores políticos sejam cada vez mais responsáveis respeito aos processos de deliberação e execução das políticas públicas.

A LFTAIPG é uma legislatura valiosa, bem concebida, bem articulada, e inequívoca nas definições e objetivos para garantir o direito dos individuos para obter a informação em posse do governo. Estabelece que toda a informação governamental tem carácter público (artigo 2), e instrui a todas as dependências e entidades do governo a favorecer o “princípio da publicidade” (artigo 6) por encima da reserva.¹ Se pode conceder aos individuos o direito de solicitar informação que ainda não ha sido pública por meio dos procedimentos simples e expeditos (artigo 40). Assim mesmo, se otorga a qualquer pessoa o direito de recorrer em contra da decisão de uma entidade de denegar a informação (artigo 49), e também se lhe concede o direito de levar a entidade a juízo ante os tribunais sempre e quando o recurso da revisão e denegado.

Mas além de estabelecer o carácter público de praticamente toda a informação que possea e genere o governo, a Lei dispõe um enlistado de “obrigações de transparência” que cada dependencia

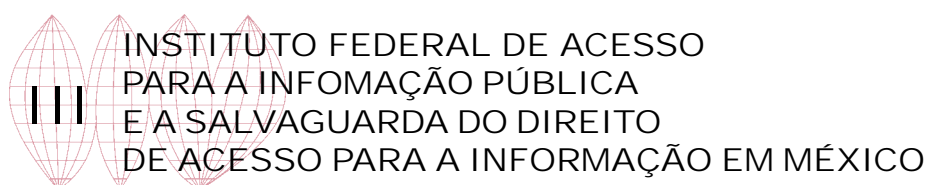
¹ De acordo com o artigo 13 da LFTAIPG, certa informação em posse do governo se pode considerar como “reservada”; como seja, certa informação se pode encontrar temporalmente sujeita nas excepções de acesso e divulgação si e só si sua difusão pudera:

- I) Comprometer a segurança nacional, a segurança pública ou a defesa nacional;
- II) Menoscabar a condução das negociações ou bem, das relações internacionais, incluída aquela informação que outros estados ou organismos internacionais entreguem com o carácter de confidencial ao Estado Mexicano;
- III) Danar a estabilidade financeira, económica ou monetária do país;
- IV) Peligrar a vida, segurança ou saúde de qualquer pessoa, o
- V) Causar serio prejuizo nas atividades de verificação do cumprimento das leis, prevenção ou persecução dos delitos, a impartição de justiça, as recaudações das contribuições, as operações do controle migratorio, as estrategias nos processos judiciais ou administrativos sempre e quando estas resoluções não causen estado.



e entidade deve observar. O Artigo 7 da Lei obriga as entidades a publicar, de maneira rotinaria e acessível, toda aquela informação relativa das funções diarias, presuosto, operações, endereço do pessoal, salarios, informação interna, e celebração de contrato e concessões. Ademais da LFTAIPG, o regulamento da Lei impõe um mandato preciso de atualizar a informação relativa das "obrigações de transparência" de todas e cada uma das dependencias e entidades da Administração Pública Federal no periodo de tres meses a um ano.

A existencia de uma legislação em materia do acesso para a informação pública governamental, sem embargo, não garante a prática efetiva do direito do cidadão de acceder na informação. Em alguns países a legislação não provee mecanismos que reforcem o acesso da informação; outros governos crean obstáculos ou aproveitam vazios legais para resistir em difundir a informação que esta no seu poder. Por estas razões e para avanzar exitosamente na execução do direito a acceder na informação, algumas legislações proveem a criação de instituições autônomas encarregadas de vigiar a observação da legislação do acesso para a informação na possessão do governo.



A LFTAIPG considera, no artigo 33, a criação do Instituto Federal de Acceso para a Informação Pública (IFAI), o qual começo a funcionar oficialmente em junho do 2003. O IFAI tem como função e fazer funcionar a LFTAIPG no âmbito do Poder Ejecutivo Federal, e o lugar encarregado de promover e difundir o exercicio do direito de acesso para a informação e de resolver a negativa das autoridades de dar as respostas adecuadas das petições de acesso para a informação. Mesmo assim, o IFAI tem a ordem de salvaguardar a confidencialidade dos datos pessoais no poder das dependencias e entidades. Para garantir a ordem de esta encomenda, o IFAI tem a facultade de executar as funções de regularizar e resolver; de vigiância e cordinação; de operação e administração, de promoção e difusão.

No México, desde que existe o IFAI, toda pessoa que está interessada em solicitar as informações em possessão do governo federal, pode solicitar de tres formas:

- 1.- Ir ao Centro de Atención para a Sociedade do IFAI, lugar que tem equipe de cômputo e pessoal capacitado para orientar e atender.
- 2.- Presentando-se diretamente na Secretaria do Estado ou a dependência do governo da qual se deseja obter informação. A pessoa deve ir ao escritorio especial de atención denominado "Unidad de Enlace" (Unidade de Enlace). Cada dependência (escritorio), por ordem do LFTAIPG, deve ter um de estes escritorios onde se debe dar toda a orientação necessaria para conseguir a informação requerida.

- 3.- Qualquer parte do país, e inclusive no estrangeiro, por meio do "Sistema da Solicitudes de Informação" (SISI) qual se pode acessar por Internet no endereço eletrônico <http://www.informacionpublica.gob.mx>.

Se da a referência que este último mecanismo de acesso para a informação em posseção do governo, o SISI, e uma inovação a nível internacional pois, poucos são os países que contam com um meio acessível para que os cidadãos possam solicitar informação pública governamental por meio do Internet. O IFAI ajuda aos executivos de Canada, Alemanha, Gra-Bretanha, a República Checa e Peru, entre outros países, interessados em adotar estes sistemas de acesso para a informação similares ao SISI. A revolução eletrônica tem danado o acesso para a informação e tem convertido ao governo em um disseminador de informação, reivindicando assim os valores que agora apoiam as provisões do governo aberto. O IFAI está dentro de esta corrente e da o fácil acesso de toda a cidadania de obter a informação em posseção do governo através de alguns meios de comunicação remota, como acontece com o SISI.

No seis meses de trabalho -junho a dezembro de 2003-, tem-se visto mais de 24,000 solicitações das informações das quais, o 93% foi dado por meio do SISI:

Solicitações	Total junho 12-30	Total julho	Total agosto	Total setembro	Total outubro	Total novembro	Total dezembro 01-11	TOTAL
Solicitações eletrônica	4,674	3,887	4,388	2,961	2,881	2,733	751	22,275
Solicitações manuais	426	343	255	265	233	198	82	1,802
Total de solicitações	5,100	4,230	4,643	3,226	3,114	2,931	833	24,077
Respostas eletrônicas	1,519	4,287	3,995	3,265	2,899	2,303	1,069	19,337
Respostas manuais	95	357	263	269	214	158	94	1,450
Total de respostas	1,614	4,644	4,258	3,534	3,113	2,461	1,163	20,787
Recursos de revisão	17	83	69	145	146	103	44	607

O SISI e um sistema universal que administra as solicitações de informação e dos datos pessoais, de acordo com o estabelecido na LFTAIPG, suas normas e seus linhamentos emitidos pela IFAI. Os solicitadores, o pessoal obrigado e o IFAI podem fazer uso da SISI, o qual permite administrar e suministrar informação estatística ao proprio Instituto e serve como sustento do Informe Anual que as autoridades do IFAI devem presentar ao Poder Legislativo.

O SISI se estabelece como o meio de comunicação mais eficiente entre a sociedade, as dependências e entidades e o IFAI a poder registrar todas as solicitações de acesso a informação em documentos que estejam na posseção das entidades da administração pública federal, independentemente da forma como se apresenta o solicitador, como por, Internet, por correio ou físicamente ante a Unidade de Enlace correspondente.

O SISI funciona no largo de seis etapas que constituem o processo de acesso para a informação desde que a pessoa introduz a solicitação, passando pelo processo interno de tratamento da solicitação, até a entrega da informação e eventualmente o recurso de revisão interposto ante o IFAI:

Fase 1: Solicitação- A pessoa deve captar no SISI a sua solicitação, preencher os requisitos em papel que pode ser enviado por correio ou entregar pessoalmente na Unidade de Enlace para que esta seja captada no sistema. Em todos os casos o SISI marcará um número de folio para dar sequência da solicitação.


Fase 2: Recepção e Investigação- A dependência ou entidade recebe a solicitação e a passa para a unidade administrativa correspondente, con o fin de que se investigue si esta informação existe e si o seu carácter e público, reservada o confidencial. De contar com a informação e ser pública, a unidade administrativa remite para a mesma unidade de enlace e precisa, si e que tem lugar, o custo do acordo com as modalidades de entrega.

Fase 3: Resposta, opcoes de entrega e envio- A mesma dependência ou entidade notifica ao solicitador sobre a resposta da sua solicitação. No caso de ser negativa se o informará sobre a opção de apresentar um recurso ante o IFAI. No caso que a resposta seja positiva, o SISI informará ao solicitador sob os meios nos quais podem ser reproduzidas a informação, o custo da reprodução, assim como as diferentes formas de envio e custos. O sistema emitirá uma ficha com uma clave de identificação de banco, mediante o qual se podera realizar tal pago.

Fase 4: Notificação de pago- Uma vez realizado o pago, o banco avisará automáticamente ao SISI sobre este, com o qual a dependência ou entidade saberão em todo o momento que solicitadores pagaram as coutas de reprodução e de envio correspondentes, a efeito de que procedam na reprodução e envio da informação.

Fase 5: Entrega e envio- Quando a dependência ou entidade acredite a reprodução e enviado a informação solicitada, o SISI avisará ao solicitador a data que se realizou o envio, e no seu caso o número de guia. Em todo o caso, a informação será sempre gratuita quando seja entregada de forma pelos meios eletrônicos.

Fase 6: Recurso- Si o solicitador decide apresentar um recurso de revisão pela negativa da informação, o SISI o permitira fazer-lo pelos meios eletrônicos. O solicitador também podera mandar um escrito ou ir pessoalmente al IFAI. Nestes dois últimos casos, o IFAI incorpora os dados do solicitador recorrente no SISI. O IFAI estudará o caso e notificará nesse caso ao recorrente dentro de um limite estabelecido. Por sua parte, o procedimento de consulta ou modificação dos dados pessoais através da SISI requerirá autenticar a identidade do solicitador.



IV INSTITUTO FEDERAL DE ACESSO PARA A INFORMAÇÃO PÚBLICA E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

De acordo com o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos “ninguém poderá ser objeto de intromissão arbitrária na sua vida privada, sua família, seu endereço ou correspondência, nem ataques a sua honra ou a sua reputação. Toda a pessoa tem direito a proteção da lei contra as injustiças ou ataques”. A democracia se desenvolve e justifica o respeito da privacidade das pessoas que formam parte dela. So desde o âmbito do reconhecimento da intimidade e autonomia de cada cidadão pode construir uma sociedade autenticamente livre.

A proteção dos dados de carácter pessoal encontra na sua razão de ser, não no resguardo do âmbito íntimo da vida privada, se não na possibilidade de controlar esta informação para a segurança do indivíduo frente ao risco que supõe o acopio e a transmissão dos seus dados. A fracção II do Artigo 3 da LFTAIPG define os dados pessoais como: “{...} a informação dada a uma pessoa física, identificada ou identificável, entre outras, relativo ao seu origem étnico ou racial, ou as que estão referidas nas características físicas, morais ou emocionais, a sua vida afetiva ou familiar, endereço, número telefónico, património, ideologia e opiniões políticas, crencias ou convicções religiosas ou filosóficas, os estados de saúde mental e físico, preferencias sexuais, ou outras análogas que afetem a sua intimidade”.

Para poder chegar a esta informação referente aos dados pessoais, contida nos arquivos públicos, o artigo 24 da LFTAIPG dispõe que só os interessados ou seus representantes poderão solicitar ante a Unidade de Enlace o acesso ao seus dados pessoais que obrem nas bases de dados governamentais. A informação correspondente deverá ser entregue ao interessado no lapso de 10 dias hábeis, sendo contado desde o dia da apresentação da solicitação, em um formulário compreensível, ou nesse caso, se le comunicara por escrito que neste sistema de dados pessoais não contém os referidos do solicitador. Si existe negativa de entregar ou corregir dados pessoais, se dará passo ao recurso de revisão ante o IFAI. De esta mesma maneira procederá no caso de falta de resposta nos dias previstos pela lei.

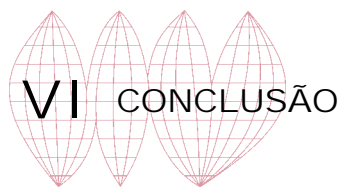
De acordo com o Artigo 37 da LFTAIPG, o IFAI tem entre as suas atribuições estabelecer e revisar os criterios de classificação, desclassificação e salvaguarda da informação reservada e confidencial (fracção III) e estabelecer a linha e políticas gerais para o movimento, conservação, segurança e proteção dos dados pessoais, que estão em posse das dependencias ou entidades (fracção IX). Neste sentido, o IFAI é a instituição encarregada de salvaguardar a proteção dos dados pessoais e de evitar a difusão, distribuição o comercialização destes dados pessoais contidos no sistemas de informação dos indivíduos obrigados.



V ACESSO PARA A INFORMAÇÃO NOS ESTADOS E MUNICIPIOS

O IFAI busca promover e estabelecer relações de colaboração e apoio com os estados e municípios, com o propósito de intercambiar experiências e impulsar o desenvolvimento normativo e institucional na matéria de transparência, acesso na informação e proteção dos dados pessoais. Treze estados da federação contam com as leis de acesso de informação: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí e Sinaloa. Outros estados mais (Chiapas, Hidalgo, Puebla e Veracruz, entre outros) se encontram no processo de adotar leis na matéria. Entre os estados se destaca Colima porque ademais da legislação de acesso para a informação colocou em vigor uma lei de proteção de dados pessoais -a primeira legislação desta índole no âmbito nacional-. No que respeita ao âmbito local, os municípios de Guadalajara, Monterrey, Querétaro e Torreón contam com normativas de transparência e acesso para a informação.





VI CONCLUSÃO

O IFAI está conduzindo a criar mecanismos que fomentem a transparência e rendição das contas em México: as obrigações da transparências impostas pela LFTAIPG e verificadas pelo IFAI contribui a aclarar os alcances deste tema e situam ao México nos melhores estandares na materia ao nivel internacional. O apartado sobre a classificação estabelece a criação de um registro de todos os documentos que produz o governo, no qual será permitido em um futuro simplificar o acesso da informação pública. Por outro lado, aclara que o período de reserva da informação conta a partir de que a informação se genere e não a partir da classificação do documento. Finalmente, o tratamento dos custos de acesso buscará evitar que o pago de reprodução e envio de informação seja um obstáculo para a transparência.

A LFTAIPG e o IFAI exercen efeitos positivos para o México nos âmbitos económicos e políticos. Sem duvida, um Estado mas transparente será por consecuencia mais eficiente. Esta melhora na eficiencia estatal não só se verá ao largo prazo no fortalecimento do erário público, que e o patrimonio de todos os mexicanos, se não também da economia em conjunto. O anterior se explica ao considerar que os custos que representa a corrupção para a nossa economia ascende a varios pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB). Ao diminuir a corrupção, estes recursos poderam canalizar-se nas atividades produtivas e sociais.

No âmbito político e dentro do processo de democratização, garantir o direito de acesso na informação o IFAI auspicia o processo de consolidação democrática no que todos e cada um dos trabalhadores públicos deveram rendir contas para a cidadania. O acesso de informação e uma das tarefas mais importantes na agenda democrática nacional, entendendo como democracia, como uma forma de participação no governo, dependera da capacidade dos cidadãos para participar no ambiente público. Assim que, o IFAI participa na construção e reforço na rendição das contas, se notara na eficiencia administrativa y cria condições aptas para que os cidadãos supervisem ao âmbito governamental.



Tiraje: 500 ejemplares
enero de 2004

edición a cargo de:

Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Dirección General de Comunicación Social



www.ifai.org.mx

Centro de Atención a la Sociedad,
Insurgentes Sur 1971, Planta Baja, Plaza Inn,
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,
Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.

e-mail: atencion@ifai.org.mx